



ESCUELA DE POSGRADO

UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

**Implementación del DNle en la Comisión de
Presupuesto del Congreso de la Republica**

TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE

Maestro en Gestión Pública

AUTOR

Br. Elias Modesto Martínez Pagan

ASESOR

Dra. Galia Susana Lescano López

SECCION

Gestión Publica

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Gestión de Modernización del Estado

PERU-2018

Dr. Chantal Jara Aguirre

Presidente

Dr. Alejandro Menacho Rivera

Secretario

Dra. Galia Susana Lescano López

Vocal

Dedicatoria

A Juan y Elena, mis
padres que desde el cielo
guían mi camino y a mi
hija a quien quiero con
todo mi corazón.

Agradecimiento

A mis profesores de la Maestría, por sus consejos y tolerancia, a mis compañeros por su apoyo en momentos difíciles.

Declaratoria de autoría

De, Elias Modesto Martinez Pagan con DNI: 08357375 estudiante del Programa de Maestría en Gestión Pública de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, con la tesis titulada “Implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica” declaro bajo juramento que:

- 1) La tesis es de mi autoría.
- 2) He respetado las normas internacionales de citas y referencias para las fuentes consultadas. Por tanto, la tesis no ha sido plagiada ni total ni parcialmente.
- 3) La tesis no ha sido autoplagiada; es decir, no ha sido publicada ni presentada anteriormente para obtener algún grado académico previo o título profesional.
- 4) Los datos presentados en los resultados son reales, no han sido falseados, ni duplicados, ni copiados y por tanto los resultados que se presenten en la tesis se constituirán en aportes a la realidad investigada.

De identificarse la falta de fraude (datos falsos), plagio (información sin citar a autores), autoplagio (presentar como nuevo algún trabajo de investigación propio que ya ha sido publicado), piratería (uso ilegal de información ajena) o falsificación (representar falsamente las ideas de otros), asumo las consecuencias y sanciones que de mi acción se deriven, sometiéndome a la normatividad vigente de la Universidad César Vallejo.

Lima, 12 de octubre de 2017

Elias Modesto Martinez Pagan

DNI: 08357375

Presentación

Señores miembros del Jurado,

Presento a ustedes mi tesis titulada “Implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica”, cuyo objetivo fue: Conocer las bondades de la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de Magíster en Gestión Pública.

La presente investigación está estructurada en 5 Capítulos y anexos: El Primer Capítulo: introducción, incluye: Antecedentes y Marco Teórico Referencial, Marco Espacial, Marco Temporal. Contextualización: Histórica, Política, Cultural, Social. Supuestos teóricos. El Segundo Capítulo: problema de investigación, incluye Aproximación Temática: Observaciones, estudios relacionados, preguntas orientadoras; Formulación del problema de investigación; Justificación; Relevancia; Contribución; Objetivos: Objetivo General, Objetivos Específicos; El Tercer Capítulo: marco metodológico, incluye: Unidades Temáticas; Definición Conceptual; Categorización; Metodología; Tipo de Estudio; Diseño; Escenario de Estudio; Caracterización de sujetos; Procedimientos Metodológicos de investigación; Técnicas e Instrumentos de recolección de datos; Mapeamiento. El Cuarto Capítulo: Resultados. El Quinto Capítulo: discusión, Conclusiones y recomendaciones y por ultimo referencias bibliográficas.

Índice de contenidos

	Pág.
Página del Jurado	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaratoria de autoría	v
Presentación	vi
Índice de contenidos	vii
Resumen	x
Abstract	xi
I. Introducción	
1.1 Antecedentes	13
1.2 Marco teórico referencial	16
1.2. Marco espacial	37
1.3. Marco temporal	37
1.4. Contextualización	
1.5. Supuestos teóricos	
 II. Problema de investigación	
2.1. Aproximación temática	45
2.1. Formulación del problema de investigación	48
2.3. Justificación	49
2.4. Relevancia	50
2.5. Contribución	50
2.6. Objetivos	51
 III. Marco Metodológico	52
3.1. Metodología	53
3.2. Escenario de estudio	54
3.3. Caracterización de sujetos	54
3.4. Trayectoria metodológica	54

3.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos	54
3.6. Mapeamiento	55
3.7. Rigor científico	55
IV. Resultados	59
4.1. Resultado del objetivo específico 1	60
4.2. Resultado del objetivo específico 2	61
4.3. De los datos obtenidos por la observación	62
4.4. De la entrevista	63
4.5. Estructuración de los resultados	64
4.6. Relación de categorías	65
4.7. Teorización	66
V. Discusión	67
VI Conclusiones	72
VII. Recomendaciones	74
VIII. Referencias	76
IX. Anexos	82
Anexo 1: Entrevistas	83
Anexo 2: Tabla de categorías	86

Índice De Tablas

		Pág.
Tabla 1	Matriz axial: objetivo específico 1	60
Tabla 2	Matriz axial: objetivo específico 2	61
Tabla 3	Cuantificación de volumen documentario en la CPCGR	64
Tabla 4	Resultado de entrevistas por categoría analizada	65

Resumen

La presente investigación titulada: “Implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica” tiene como objetivo general analizar la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica”.

El tipo de investigación fue: según su finalidad, investigación básica, el diseño es de estudio de casos, de enfoque cualitativo.

Según los hallazgos realizados a través del análisis de documentos de investigación y de entrevistas al personal que labora en la Comisión, permitió dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles serían las bondades de la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica?. La población estuvo formada por el personal que presta servicios en la Comisión de Presupuesto como son: secretario técnico y asesores de la Comisión.

El estudio llegó a la conclusión que la implementación del documento nacional de identidad electrónico en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, permite autenticar con seguridad y confiabilidad la identidad de los usuarios que por vía digital y utilizando medios electrónicos, trasladen información desde y hacia la Comisión, de modo que cada quien asume la responsabilidad civil, penal, administrativa o funcional del tráfico de información, asignando al proceso el peso autoritativo correspondiente y la propiedad del no-repudio. Asimismo ofrece al congresista la posibilidad del tratamiento digital de la información facilitando así la función congresal de fiscalización; y resuelve el problema material de archivamiento físico de la documentación.

Palabras claves: Documento Nacional de Identidad electrónico, identidad digital, interoperabilidad, Congreso de la República.

Abstract

The present research entitled "Implementation of the DNle in the Comisión de Presupuesto del Congreso de la República" has as general objective to analyze the implementation of the DNle in the Comisión de Presupuesto del Congreso de la República".

The type of research was: according to its purpose, basic research, the design is case study, qualitative approach.

According to the findings made through the analysis of research documents and interviews with the staff working in the Commission, it was possible to answer the research question "What would be the benefits of implementing the DNle in the Comisión de Presupuesto del Congreso de la República?. The population was staffed by the staff of the Comisión de Presupuesto, such as the technical secretary and the Commission's advisors.

The study concluded that the implementation of the national electronic identity document in the Comisión de Presupuesto of the Congress of the Republic, allows to authenticate with security and reliability the identity of the users that through digital means and using electronic means, transfer information from and To the Commission, so that each person assumes the civil, criminal, administrative or functional responsibility of the information traffic, assigning to the process the corresponding authoritative weight and ownership of the non-repudiation. It also offers the congressman the possibility of digital processing of information, thus facilitating the congressional oversight function; And solves the physical problem of physical archiving of documentation.

Key words: national electronic identity document, digital identity, interoperability, Congress of the Republic

I. Introducción

El acelerado desarrollo de las ciencias y la tecnología en el mundo moderno, ha facilitado la integración de los pueblos y de los hombres en general. Pero también ha servido para fines menos altruistas, tales como la tergiversación de la información o el ocultamiento del mismo. Así la tecnología nos puede esclavizar o nos puede liberar, la tecnología no es buena ni mala, es un instrumento que adecuadamente utilizado ahorra costos y optimiza la gestión.

El filósofo griego Aristóteles afirmaba que "El principio del gobierno democrático es la libertad" (Aristóteles, S.IV a.c, Libro VII, Cap. I). Para el ejercicio de esta libertad, es necesario el instrumento de la información, que a su vez es el elemento clave para el funcionamiento de la sociedad actual. De ello resulta que la información está a la base de la vigencia de la libertad. Y de allí que es de importancia crítica las fuentes de dicha información, como son los distintos niveles de gobierno, sea local, regional o nacional.

Ya desde tiempos antiguos el conocimiento de las cuentas públicas era necesario para un adecuado equilibrio de las fuerzas políticas. Es decir la premisa es mayor acceso a la información genera mayor participación ciudadana utilizando medios electrónicos.

Con los avances de la democracia en los últimos siglos y con el desarrollo de las tecnologías en las últimas décadas, el ciudadano se encuentra en un sitio privilegiado, por cuanto el gobierno está obligado a publicar y difundir la información poniéndola al alcance de todo ciudadano.

El hecho de que el gobierno brinde la información se enmarca en el concepto de transparencia de la gestión pública, un concepto que expresa el control real por parte de los gobernados (los ciudadanos) de las actividades y acciones que realiza el gobierno.

1.1 Antecedentes

El derecho a acceder a la información pública está contemplado en el ámbito constitucional y en la Carta Universal de los Derechos Humanos. Es pues un derecho primordial del ser humano y más aún en una sociedad denominada democrática resulta imprescindible sobre todo si se cuenta con

el factor tecnológico. Por ello el desarrollo normativo está obligado a guardar relación con el desarrollo tecnológico, de modo que se cumpla el principio de transparencia.

La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico del 2011, define al “Gobierno Electrónico” o “Administración Pública Electrónica” como la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en las entidades del sector público para mejorar la atención a los ciudadanos, hacer mas eficaz y eficientes la gestión e incrementar la transparencia y la participación ciudadana.

En el Perú, los principios para la modernización de todas las entidades públicas se establecen en la ley de modernización del estado del 2002; para luego, en el 2013, promover la incorporación progresiva de las TIC con la ley de simplificación administrativa.

Con respecto al documento nacional de identidad electrónica, DNle, y a su implementación en entidades del estado, es amparada y promovida por la política nacional de gobierno electrónico promulgado en el mismo año 2013, habiendo sido implementados como elementos centrales del sistema de trámite documentario de algunas entidades.

1.1.1 Antecedentes Internacionales

Rivera (2004), en “El documento electrónico como medio probatorio en un proceso judicial” desarrolló un estudio de la aplicación de los documentos electrónicos, entre ellos la firma electrónica, en el ámbito de los procesos judiciales de Chile. Postula que las vías de información, comunicación y avances tecnológicos han multiplicado y diversificado las formas de celebración de actos jurídicos y contratos.

En tal contexto, afirma que el derecho enfrenta el desafío de adaptarse a las nuevas realidades que surgen como consecuencia del mundo globalizado.

El documento electrónico es esa nueva realidad, lo que obliga a estudiar no solo el proceso que conlleva, sino también las medidas que se

van adoptando, las posibilidades de desarrollo y las aplicaciones concretas que se pueden implementar tanto en los ámbitos de la administración pública como en las actividades de los negocios, transacciones y la vida cotidiana de las personas.

Por su parte, Guerra, Pérez y Cano (2011), en “El documento electrónico como medio de prueba” en Colombia, analizan la validez de la prueba documental electrónica dentro de un proceso jurídico, a partir de la constatación de que la prueba es el alma del proceso. En este sentido, los elementos tecnológicos al alcance de los usuarios establecen, en el desarrollo del derecho y de la administración pública, los elementos de entera validez para los procesos jurídicos y administrativos. Afirman asimismo que una firma autógrafa, denominada firma digital, como forma específica del documento electrónico, asigna calificación de autenticidad y veracidad a la información, por cuanto refleja el debido consentimiento por parte del suscriptor que la sustenta, así como la obligación de lo que contiene demostrando la autoría del mismo.

De esta manera, afirman, que quedan establecidos los derechos y las obligaciones inmanentes en el documento electrónico.

1.1.2 Antecedentes Nacionales

Cueva, Verástegui y Gallo (2015), en el libro compendio “Identidad Digital” de Reniec, han referido que distintas instituciones peruanas, vienen implementando políticas para el uso intensivo y cada vez más extenso, de la identidad digital, DNle, tanto en los asuntos públicos como privados, para lo cual se le ha ido incorporando características jurídicas y tecnológicas, obteniendo así un documento identitario confiable, seguro, de amplia capacidad de almacenamiento, listo para ser usado en las transacciones con el estado y la sociedad.

De esta manera, indican, los ciudadanos peruanos están preparados para ingresar con seguridad y solvencia, a la era de la globalización, del comercio electrónico y a utilizar intensivamente los servicios que puede brindar un gobierno digital. Postulan que las alternativas a futuro van de la

mano del desarrollo de las tarjetas inteligentes, previéndose escenarios de interfaz dual e híbrida, uso amplio de celular móvil para efectos de identificación, uso del DNle como medio de pago, y la privacidad en medios virtuales.

Aliaga y Calderón (2015), en “Interoperabilidad en el Perú”, sustentan que la implementación de la interoperabilidad, entendida como el sistema de intercambio de información por medios digitales entre el estado y la sociedad, significa la posibilidad de gestionar la cosa pública sin soporte físico impreso, facilitando los procesos, la transparencia, la rapidez y la eficiencia. Desarrollan el criterio de comunidad digital, por el cual una plataforma ad hoc, junto con procedimientos convenientemente digitalizados y una información gestionada con estándares y protocolos, brindarán (y de hecho ya hay avances al respecto) la posibilidad de uso compartido de sistemas de información, tanto a escala nacional y subnacional. En este sentido, afirman, que el Perú ha logrado avances sustantivos al respecto, a consuno de los acuerdos internacionales sobre gobierno electrónico, la agenda digital, y la política de modernización del estado. Concluyen que la aproximación al ciudadano es más real cuando se hace con plataformas TIC que intercambien información, con los debidos estancos sectoriales sin perder flexibilidad ni velocidad de actualización. A estos objetivos obedecen las distintas políticas y lineamientos públicos aprobados.

1.2 Marco teórico referencial

1.2.1 Implementación de políticas de modernización

Yrivarren (2015) en su ensayo “Identidad, identificación y persona humana: por la institucionalidad de lo diverso”, afirmó, rememorando a pensadores de la peruanidad, que la sociedad peruana efectivamente “es de todas las sangres, mayoritariamente mestiza, una sociedad en permanente construcción, una nación en formación, con una y muchas identidades, con una riqueza que es su diversidad, lo que nos hace únicos y diferentes para afrontar un ineludible proceso de mundialización”. Se entiende este proceso como un discurrir de interdependencia en la economía, la tecnología, la política, lo social y lo cultural, que incluye a las sociedades y sus formas

organizacionales. Asimismo señaló que el principio de la individualización de las personas es sinónimo de la identificación de las mismas dentro de un colectivo, donde la identidad se deriva de la diversidad y la identificación de la institucionalidad; de modo que entre identidad e identificación media el registro de datos personales y entre la institucionalidad y la diversidad media la tecnología.

La Presidencia del Consejo de Ministros (2004) en un decreto supremo abordó la disyuntiva de la globalización de la sociedad con el denominado proceso de modernización cuya justificación tuvo como punto de partida la constatación de que el Perú es un estado deficitario, que no tiene “la capacidad de gastar bien lo que recauda y de generar las condiciones para un crecimiento sostenible que conlleve a un desarrollo económico y social”. Afirmó también que estas “deficiencias del Estado tienen impacto en la vida de los ciudadanos y en las actividades empresariales, lo que tiene consecuencias en el bienestar de las personas, en la legitimidad de los gobiernos y, por lo tanto, en el sistema democrático y sus instituciones”. Por estas razones planteó que es necesario “una política integradora de modernización de la gestión pública, para asegurar que todas las entidades de los tres niveles de gobierno actúen de manera articulada y consistente en dirección de mejorar el desempeño general del Estado en el servicio a sus ciudadanos”.

Se deriva de lo mencionado que estamos inmersos en un proceso irreversible de globalización, ante lo cual el estado hace uso de la tecnología para atender de mejor manera las necesidades de sus ciudadanos.

1.2.2 Implementación del DNI en el Perú

Barrera y Dávila (2015), en “Evolución del documento nacional de identidad en el siglo XX”, dio cuenta que la identificación de las personas en el Perú, tiene sus más remotos antecedentes en una Real Orden de 1749 que ordenó la información de estados mensuales de nacimientos, matrimonios y defunciones. Dio cuenta también que, en la era republicana, en 1852, se promulgó el Código Civil que creó los Registros del Estado Civil; sin embargo, a lo largo del siglo XX, la identificación sustantivamente estuvo

relacionada con los procesos electorales, estableciéndose en 1931 la denominada “Libreta Electoral”, que dio origen al registro electoral con el objetivo central de inscribir a los ciudadanos con derecho a sufragio. Añadieron que en 1978 se incorporó el registro de los analfabetos; y que en 1995, al crearse el RENIEC, se estableció el registro único de identificación de las personas naturales y su correlato del documento nacional de identidad.

De las normas jurídicas

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989), en sus artículos 7 y 8, estableció como derecho humano el derecho a la identidad, debiendo todo niño ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre y a una nacionalidad.

Por su parte la Constitución Política del Perú de 1993, en su artículo 2, estableció como derecho fundamental el derecho a la identidad y que el concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. Asimismo en los artículos 177 y 183, encargó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil mantener el registro de identificación de los ciudadanos y emitir los documentos que acreditan su identidad.

La Ley N° 26497, Ley Orgánica de Reniec, promulgada en 1995, creó el registro único de identificación de las personas naturales y estableció el documento nacional de identidad como cédula de identificación personal.

De los recursos necesarios

Del Proyecto de Ley N° 3591/2013-CR, que propone la ley que dispone que las entidades públicas envíen a través de medios electrónicos o aplicativos informáticos la información o documentación que por mandato legal presentan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, se dedujo que para implementar el documento nacional de identidad electrónico en estos procesos, los recursos necesarios son los siguientes:

- Certificación digital de las firmas de los usuarios emitida dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica
- Infraestructura computacional, incluyendo huelleros biométricos, para el repositorio digital de la información y documentación electrónica, que debe seguir los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Archivos

Normas de la implementación

La Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados digitales, promulgado en el año 2000, reguló el uso de la firma digital y los certificados digitales, siendo estos últimos un componente fundamental del documento nacional de identificación electrónica

Con Resolución Ministerial N° 274, en el año 2006, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la estrategia nacional de gobierno electrónico, que entre otros mandatos, establece el seguimiento del Plan de Desarrollo de la Sociedad de la Información en el Perú - La Agenda Digital Peruana.

Con el Decreto Supremo N° 083 del año 2011, la Presidencia del Consejo de Ministros creó la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE, como una infraestructura tecnológica para permitir la implementación de servicios públicos por medios electrónicos y el intercambio electrónico de datos, entre entidades del Estado a través de Internet, telefonía móvil y otros medios tecnológicos disponibles. Establece asimismo que este sistema de interconexión intragubernamental se implemente en el marco del proceso de modernización de la gestión del Estado.

Complementariamente con el Decreto Supremo N° 016 de febrero de 2017, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó la Estrategia nacional de datos abiertos gubernamentales del Perú 2017 - 2021 y el Modelo de datos abiertos gubernamentales del Perú, con el objeto de mejorar la prestación de los servicios públicos que el Estado brinda a la ciudadanía, como parte del proceso de modernización de la gestión pública.

Eficiencia, eficacia y control de la implementación

La propuesta de implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, partió de la constatación de que para cumplir con las normas actuales, entre ellas la Ley de Presupuesto Público, las entidades públicas esparcidas en todo el territorio nacional acopian información presupuestaria de manera física periódicamente que son remitidas a la sede del Congreso de la República con el consiguiente costo de edición documentaria, traslado y almacenamiento físico. Posteriormente esta información debe ser reproducida, al menos para cada congresista miembro de la Comisión, que fluctúan entre 20 y 25 personas, lo que multiplica las necesidades materiales de edición y los aspectos logísticos de manipulación y almacenamiento en cada despacho. A ello debe añadirse que esta forma de tratamiento de la información, presenta limitaciones y dificultades para el análisis presupuestal, lo que redundo en la lentitud del procesamiento y la formulación de conclusiones retrasando la respectiva toma de decisiones en las funciones congresales de legislación y fiscalización.

La eficacia como capacidad para producir el efecto deseado, se evidencia en este caso, al ser el tratamiento digital de la información una comunicación electrónica, la transmisión es en línea es decir al instante. Con ello se logra inmediatamente el objetivo de contar con la información, tanto en la propia Comisión como en los despachos congresales.

La eficiencia es la relación de logros con los recursos empleados. La propuesta mejora sustantivamente la eficiencia si se considera que sin incurrir en costos de almacenamiento, traslado y edición, la información puede ser procesada con precisión y exactitud tanto por la propia Comisión de Presupuesto como por los despachos congresales. Se añade a ello que al transmitirse por medios digitales, se eliminan los riesgos de errores de digitación y se tienen las condiciones para el acceso ciudadano a esta información.

1.2.3 Documento nacional de identidad

El proceso de identificación tiene como finalidad responder a la interrogante ¿Quién es usted?. Ese proceso lo cumple una entidad que tiene como función la de proveer la identidad. En el caso peruano, la entidad establecida en el marco constitucional y legal es el RENIEC para realizar la función de proveedor de identidad resguardando los derechos de cada persona y la privacidad, confiabilidad, integridad y fiabilidad de sus datos personales.

La autenticación es un proceso por el cual un concurrente presenta una credencial generalmente en el contexto del ejercicio de un derecho que asiste a esta persona. Por su parte el receptor de la credencial aplica un mecanismo de verificación de la autenticidad mediante un acto comparativo con un referente ya registrado con anterioridad, con el objetivo de descartar eventos de suplantación.

Este proceso de autenticación es una condición necesaria para la determinación si los derechos o privilegios pueden aplicarse o no, de modo que el receptor autoriza o no el ejercicio del derecho o privilegio solicitado por el concurrente. Es decir se formula la interrogante “¿A qué está usted autorizado?”.

Ahora bien, para obtener la información relacionada al presupuesto público, el sistema informático que utilice la CPCGR deberá utilizar la identificación ya realizada a través del Documento Nacional de Identidad Electrónico (DNle) , la autenticación comprobando la identidad de la persona que utiliza esta credencial en los medios electrónicos y la autorización determinando por cada persona los privilegios, roles y responsabilidades que asume en el proceso de obtención de la información presupuestal realizada íntegramente en un proceso electrónico no presencial.

1.2.4 Documento nacional de identidad electrónico - DNle

El DNle se emite desde Julio del año 2013 de acuerdo con el Plan de Lanzamiento del DNle- Introducción, Lanzamiento y Masificación 2013-2021, el que en su versión 1.0 contempla una implantación gradual y progresiva.

Eddie Cueva et al (2015), en “Identidad digital” señaló que “los estudios referidos al DNI electrónico se iniciaron en el RENIEC el año 2005. En ese entonces se estableció contacto con los fabricantes más importantes de documentos de identidad y documentos de viaje a escala mundial para empezar a conocer los principales conceptos y el estado del arte en la materia. Asimismo, se efectuó un estudio preliminar para la implantación del DNI electrónico por parte de una empresa consultora local, contándose con la estrecha colaboración de personal técnico especializado de RENIEC, como consecuencia de ello se logró desarrollar un prototipo enteramente funcional de un documento de identidad electrónico. El resultado de esta iniciativa quedó plasmado en el Informe técnico RE-GIE-SGTI-IT-DNI-IDE3.1-IT, aprobado por Resolución Jefatural N° 1202-2005-JEF/RENIEC”. (p. 201).

El DNle es un documento acreditatorio de la persona tanto presencial como virtual, pudiendo aplicarse para todo efecto de firma digital y se convierte en el medio indispensable para el voto electrónico. Por esta razón forma parte de la Política Nacional de Gobierno Electrónico, aportando mediante los certificados digitales, las condiciones de confianza y seguridad a las transacciones electrónicas; y que los servicios públicos sean accesibles a la población de manera permanente y eficiente.

Según el Decreto Supremo 052 del año 2008, que aprueba el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales, el DNle es un Documento de Identidad emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC que acredita presencial y electrónicamente la identidad personal de su titular permitiendo la firma digital de documentos electrónicos y el ejercicio del voto electrónico no presencial. (Art. 45).

Características del Documento nacional de identidad electrónico - DNle

A efectos de poder disponer de un documento seguro y confiable, se incorporó un conjunto de elementos de seguridad, que son los siguientes:

1. Fondo con patrón Guilloche

2. Microtexto o microlínea.
3. Elemento con Tinta Ópticamente Variable (OVI)
4. Un arco iris como fondo del conjunto
5. Diseño que incorpora tecnologías de monedas y medallas.
6. Superficie con Imagen Laser Cambiante (CLI).
7. Numero de Código Único de Identificación (CUI) con dígito de verificación.
8. Foto fantasma con fecha de nacimiento (CLI).
9. Fecha de nacimiento sensible al tacto.
10. Fotografía en vertical con numero de CUI traslapado.
11. Numerología de Reniec.

1.2.5 Gobierno Electrónico

Puede ser definido como la provisión de información y servicios gubernamentales y la apertura de canales adicionales para la participación política, transparencia y responsabilidad por medios de tecnologías de la información y comunicación (TIC) (Yildiz y Saylam). Means y Shneider (2000) lo definen como la relación entre los gobiernos y sus clientes (empresas, otros gobiernos y ciudadanos) por medio del uso de medios electrónicos.

En el desarrollo del gobierno electrónico es importante tener en consideración no solo las necesidades de las instituciones sino también de los ciudadanos. Así un factor de éxito para el gobierno electrónico es el considerar a los ciudadanos y empresas como clientes de la institución y diseñar los servicios de acuerdo con sus necesidades. A medida que avanza el nivel de maduración del gobierno electrónico y se crean más servicios digitales, aparecen nuevas consideraciones tales como la integración entre organismos públicos, seguridad de datos, privacidad de la información, estructuras organizacionales, seguridad nacional, competitividad global y la protección de las libertades civiles (Hohbach 2002).

El gobierno electrónico es de hecho un instrumento para asuntos de gobierno, de modo que ha redefinido el concepto de procesos colaborativos,

la responsabilidad de gestión, la estructura misma de las instituciones y la la cooperación interinstitucional es intergubernamental.

El efecto en la administración pública incluye la afectación de las estructuras funcionales de linealidad jerárquica, por cuanto lo interactivo y disponibilidad continua de la información en el gobierno electrónico obliga a una transversalidad de jerarquías.

La Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017, aprobada por el DS. 081-2013-PCM, indicó que el gobierno electrónico, es el uso de las TIC en la administración del estado para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y la eficiencia de la gestión pública e incrementar la transparencia en el sector público y la participación de los ciudadanos.

Para el Banco Mundial la aplicación por las agencias del Gobierno de las Tecnologías de Información tales como redes WAN, el Internet y computadoras móviles con capacidad de transformar las relaciones con los ciudadanos, las empresas y con el propio Gobierno. (PCM. 2013)

1.2.6 Fases del Gobierno Electrónico

En el Gobierno Electrónico también se pueden determinar fases (OEA 2010: 16-20) que sin guardar una sucesión homogénea, sí se relacionan con la intensidad de presencia en la internet de la información y los servicios digitales del estado:

Presencia.

Se refiere a que las entidades públicas hagan uso de las plataformas informáticas para, por ejemplo, publicar la legislación, difundir y acceder a los servicios que prestan, etc.

Interacción.

La población concurrente puede comunicarse mediante la tecnología digital con las dependencias estatales, sea por las páginas web, el correo electrónico o las redes sociales. En este aspecto, en el 2008, se ha

establecido ya por la ONU un nuevo grado de evolución denominado “Gobierno conectado”

Este nivel de desarrollo implica que las TIC son aprovechadas para lograr un mejor acercamiento del estado hacia la población, que se materializa con las consultas en línea (chats). De hecho entidades públicas como la Defensoría del Pueblo y el RENIEC, tienen ya establecidos servicios de esta naturaleza.

Transacción.

Posibilidad de realizar algunas gestiones a distancia mediante las plataformas digitales. El Banco de la Nación, RENIEC, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), son ejemplos del uso de las TIC para trámites de pagos, duplicados, reclamos y declaraciones juradas, respectivamente.

Transformación.

La concurrencia de los distintos usos, aplicaciones, servicios, empujan a una nueva fase de desarrollo: la necesaria colaboración e interconexión entre las entidades del estado, apareciendo formas novedosas y creativas en las operaciones de los servicios públicos. En el Perú tenemos, en este aspecto, a la denominada Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE).

1.2.7 Beneficios de la tecnología y del Gobierno Electrónico.

Los beneficios que brinda el Gobierno Electrónico son diversos, ya que permite fortalecer y mejorar la gestión pública tanto en el ámbito interno (Back Office) como en el ámbito externo (Front Office) (CEPAL 2012: 14-15).

Para el Estado

Permite mejorar los procesos de gestión internos. • Mejora la comunicación y coordinación intrainstitucional e interinstitucional. • Genera espacios de trabajo colaborativo para brindar servicios. • En el plano de las

políticas públicas, replantea el proceso de diseño, al tomar en cuenta, como nuevo como ponente, a las TIC. • Fortalece la innovación y modernización del Estado. • Mayor eficiencia en la capacitación y formación y desarrollo de habilidades.

Para los ciudadanos

Permite obtener mejores servicios del Estado, con reducción de tiempo y de costos.

Permite fortalecer la transparencia de las entidades públicas. • Mejora la participación ciudadana al brindar nuevos espacios de diálogo horizontal, fomenta el control ciudadano (accountability) y, por ende, contribuye a la gobernabilidad.

Para las empresas

Les permite establecer relaciones comerciales con el Estado con mayor transparencia. • Agiliza los procesos de los trámites tradicionales sustituyéndolos por trámites en línea.

1.2.8 Lineamientos del estado sobre gobierno electrónico

La Agenda Digital Peruana 2.0 sustenta los lineamientos estratégicos para la Sociedad de la Información en el Perú, meta que fue incluida en el primer Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Plan Bicentenario 2021.

Las políticas públicas de tipo institucional se establecen con la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, las políticas de corte económico para el fomento del crecimiento y desarrollo nacional con la Agenda de Competitividad 2012-2013, y como referentes propios en la materia, con la Estrategia Nacional de Gobierno Electrónico 2006.

En este sentido, se han establecido objetivos nacionales tales como: (a) fortalecer en la administración pública el sistema de gobierno electrónico mediante la interoperabilidad, (b) acercar el estado a los ciudadanos poniendo a su alcance información oportuna y precisa, (c) establecimiento de mecanismos de seguridad para la información, otorgando a ésta

condiciones de confidencialidad e integridad, sin desmedro de estar disponible para su uso y la ciberseguridad será política permanente, (d) el gobierno electrónico debe servir para la inclusión digital de los peruanos, atendiendo de preferencia a las poblaciones vulnerable, para lo cual se desarrollarán acciones de innovación tecnológica y capacitación, en un contexto de pluriculturalidad y respeto al medio ambiente, (e) búsqueda de la sociedad de la información y el conocimiento fortaleciendo la inclusión, la igualdad de oportunidades y la democracia. (Normas Legales. 2013)

1.2.9 El gobierno electrónico en el tiempo

La teoría y la práctica sobre el gobierno electrónico, ha tenido las siguientes líneas de evolución: (a) automatización de algunos procesos de la administración pública, (b) introducción de las computadores personales y la irrupción de Windows como plataforma del sistema operativo, (c) servicios de información pública mediante las páginas web institucionales, (d) servicios de información de los gobiernos mediante portales y formulación de políticas públicas hacia la sociedad de la información.

La primera etapa se caracteriza por las grandes infraestructuras de computadoras que irrogan considerables montos de inversión para los estados, ubicándose esta etapa entre 1970 y 1980, cuando en Latinoamérica se adquieren Mainframes NCR, IBM, Burroughs, Wang, etc. La segunda aporta tecnologías de interfase de texto e interfase gráfica e inicia el fenómeno de la masificación del uso de computadores, y los funcionarios públicos constituyen el sector de mercado que prontamente se articula a este avance tecnológico. Por su parte la tercera etapa perfila de mejor manera el concepto de gobierno electrónico, esto es una gestión pública haciendo uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, acercando el estado al ciudadano. Un año hito en este desarrollo lo ubicamos en 1994, cuando el ámbito de acción de internet se amplía hacia la sociedad entera, superando el exclusivismo de la academia y de los entornos militares. Las plataformas informáticas muestran proveedores como Unix, Linux, Windows NT/2000, etc. Finalmente en la cuarta etapa, ya en el siglo XXI, América Latina se encuentra en decidida marcha hacia la

automatización de las gestiones de gobierno, diversificando los servicios en línea, e incluso instaurando estrategias nacionales de gobierno electrónico. Si bien no existe una homogeneidad de criterios ni prioridades compartidas, sin embargo los avances son sustantivos en países como Brasil, Chile, Colombia, México, República Dominicana y Perú. (Red GEALC, SEDI-OEA, ICA/IDRC, 2008.b)

En paralelo a este fenómeno de masificación y modernización tecnológica, la democracia y la participación ciudadana se vinculan también al concepto de gobierno electrónico, sobre todo cuando nuevamente se impulsan políticas de nuevas reformas. El objetivo subyacente en ello es pretender mayor transparencia y mayor legitimidad de los estados. Por ello se enfatizan políticas de control de la ciudadanía, comunicación permanente y bidireccional, participación de la sociedad civil en las decisiones del gobierno. Estos componentes otorgan un nuevo énfasis a los procesos de modernización, y reafirman la necesidad de un estado cerca del ciudadano.

Vemos entonces el correo electrónico y los sitios web como nuevos elementos de información, que dieron base a los mecanismos de consulta y participación mediante espacios chat, los foros virtuales, etc.

1.2.10 El gobierno electrónico como esquema conceptual

Se pueden identificar hasta 5 componentes que se articulan y complementan para construir el esquema conceptual de lo que se trata:

Gobierno electrónico.

Postula que la administración pública de los distintos niveles, sea municipal, departamental o nacional, incorpore en sus procesos de gestión las nuevas tecnologías de información y comunicación, incluyendo la participación ciudadana en línea a través de estas plataformas.

Democracia electrónica.

Promueve que las dinámicas inherentes a la vida política, ya sea de los medios de comunicación, de los movimientos políticos y del sistema de partidos, hagan uso intensivo y masivo de las denominadas TICs. La toma

de decisiones de las distintas gestiones, incluyen mecanismos de participación electrónica.

Voto electrónico.

Las instancias electorales utilizan las TIC para facilitar la participación electoral, así como la precisión y rapidez de los resultados

Parlamento electrónico.

Los procesos de la producción de leyes y la propia administración de la organización parlamentaria (personal, logística, presupuestos, trámites, dinámicas de funcionamiento de los despachos congresales, etc.) se soportan en las nuevas tecnologías para mejores performances legislativos y de gestión. De hecho, la participación ciudadana que es de importancia crítica en todo congreso, aprovecha este nuevo escenario de participación electrónica.

Ciudad digital.

Las municipalidades y las corporaciones públicas implementan infraestructura, aplicaciones y aplicativos TIC para la gestión de la ciudad (transportes, seguridad, limpieza, arbitrios, recreación, etc., etc.), incluyendo aspectos de participación electrónica. (Red GEALC, SEDI-OEA, ICA/IDRC, 2008.c)

Por otro lado, la modernización tecnológica de los estados para implementar el gobierno electrónico, requiere que los funcionarios públicos modifiquen sus enfoques y actitudes frente a la tecnología a través de un proceso de acondicionamiento, capacitación, experimentación, etc., lo que implica que no es cuestión de una ley o una simple decisión de la alta jerarquía del estado. Y también es necesario hacer reingeniería en varios aspectos de la administración, entre ellos los procesos y procedimientos, con un claro y decidido liderazgo.

Fluye de lo anterior el requerimiento de recursos financieros y apreciables esfuerzos de coordinación y colaboración entre las distintas dependencias. Por ello, la alta dirección del estado son los que cuentan con

la mejor ubicación para liderar e implementar estos procesos, por cuanto están en una posición crítica para involucrar a todas las dependencias en una visión compartida de tecnologías nuevas, procedimientos optimizados y cercanía a los ciudadanos. Es decir, la implementación del gobierno electrónico necesita de la adecuada voluntad política para que las decisiones cuenten con la clara convicción y ejercicio de liderazgo, requeridos para superar las resistencias, los contratiempos y de hecho las oposiciones que suelen presentarse en los procesos de cambios. Este liderazgo es aún más crítico frente a los riesgos inherentes a estos nuevos procesos, por lo que la motivación política se inicia con una adecuada “venta” del proyecto de gobierno electrónico. Mostrar los beneficios que de ello se derivan, es una forma que ha dado resultados, en un escenario donde aparecen nuevos líderes desde el desarrollo de los procedimientos y los algoritmos hasta métodos innovadores de persuasión, explicación y difusión. La innovación en los liderazgos es de hecho la característica fundamental de estas reformas.

Un segundo elemento a tomar en cuenta es que el gobierno electrónico sólo puede implementarse de manera progresiva pues con las reformas de modernización sucede como con las estructuras sociales sedimentadas con el tiempo en que solo soportan cambios graduales de la matriz de existencia. Sea por las tecnologías tradicionales, las costumbres asumidas por el personal o los procedimientos ya conocidos, se erigen resistencias, intereses y actitudes, que la gradualidad es imprescindible, lo que implica paciencia, persistencia, y continuidad. Para ello, un aliado estratégico es la demanda pública de mejoramiento de los servicios, visto como un elemento del dinamismo de la voluntad política.

Ahora bien, este proceso de gradualidad implica también distintas velocidades en los distintos niveles y circunstancias. En este aspecto, las prácticas exitosas de algunos aspectos gobierno electrónico constituyen un valioso elemento favorable para la mejor implementación del conjunto del proyecto; de modo que los antecedentes de éxito deben capitalizarse en mayores iniciativas políticas, poniendo por delante que la ciudadanía demanda un mejor servicio, y ésta recuerda lo positivo de dichas experiencias.

1.2.11 Tipologías de Gobierno Electrónico

Los relacionamientos del gobierno con los demás actores sociales determinan los distintos tipos o modelos utilizados para la clasificación de sus interacciones:

De Gobierno a Gobierno (G2G).

Este tipo de gobierno electrónico se refiere principalmente al facilitamiento vía las TIC de las transacciones, y procedimientos automatizados tanto entre los distintos estamentos del estado como a nivel intergubernamental. El sistema integrado de información financiera (SIAF) implementado desde el MEF con todos los pliegos presupuestales, es un ejemplo de este tipo G2G.

De Gobierno a empresa (G2B).

Hace referencia a los servicios en línea que se implementan para la comunicación con las empresas, facilitando los trámites y gestiones con las personas jurídicas. Un claro ejemplo es el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Compras del Estado (SEACE), o el SUNAT Operaciones en Línea (SOL) que permite realizar operaciones de los contribuyentes para efectos aduaneros y tributarios.

De Gobierno a ciudadano/usuario (G2C).

Es aquel que, por medios digitales, brinda información o permite el uso de los servicios administrativos por parte del público en general. Modelo de ello son los portales de las municipalidades, CODESI, etc.

De Gobierno a empleados (G2E).

En este caso las tecnologías de información y comunicación se utilizan para la capacitación o la propia prestación de servicios a los funcionarios de la administración pública. De hecho la plataforma educativa de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR se ubica en este tipo de gobierno electrónico.

1.2.12 Sistemas de Gestión de Identidad

Existen dos tipos de sistemas de gestión de identidad: los centrados en la aplicación y los centrados en el usuario. En el primer caso, los sistemas de gestión de identidad de gran escala o centrados en la aplicación, el sistema de gestión de identidad centrado en la aplicación significa que los servicios y políticas en materia de identidad han sido concebidos para satisfacer los requisitos de los proveedores de servicios de identidad y optimizados para los requisitos de las aplicaciones.

En cambio, el sistema de gestión de identidad centrado en el usuario se concentra en los usuarios finales y está optimizado para los requisitos de esos usuarios concretos, lo que significa que el principal objetivo de un sistema de gestión de identidad es proporcionar servicios de identidad conveniente y completa a los usuarios.

Al respecto, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI, (2017), indicó que “en el sistema de gestión de identidad centrado en el usuario, hay que instalar en el entorno informático del usuario un programa cliente que interactúa con el servidor para recuperar información de la identidad. Por lo tanto, se necesitan directrices de seguridad fáciles y amplias a fin de guiar al usuario para que instale y utilice los programas informáticos pertinentes en condiciones de seguridad”.

1.2.13 La Seguridad y la Gestión de Identidad

Una de las preocupaciones de las personas que navegan en internet es la seguridad de las transacciones que realizan. Dentro del tema de seguridad se destacan los siguientes problemas: De un lado las partes que realizan transacciones en internet no mantienen un contacto físico, lo que genera preocupación por la autenticidad; por otro lado al usarse redes abiertas de comunicación surge la preocupación que una tercera persona pueda tener acceso y alterar la información que se envía a través de la Red, lo que genera problemas de confidencialidad e integridad de la información.

Umaña (2003), en referencia a los aspectos de seguridad en la identificación, indicó que “muchas tecnologías han surgido para tratar de dar solución a estos problemas, pero la que sin duda parece imponerse desde hace algunos años es la tecnología conocida como Infraestructura de Clave Pública. El funcionamiento de esta tecnología se encuentra indisolublemente ligado a las entidades de certificación digital, que surgen como terceros de confianza que procuran asegurar la autenticidad, la integridad, la confidencialidad y el no repudio de la información en las operaciones de comercio electrónico”. (p. 438).

La confianza se genera desplegando una serie de actividades tendientes a asegurar la identidad de sus suscriptores y el uso del certificado digital a través del sistema de certificación digital. La propuesta de utilizar la identidad digital y los certificados digitales en las comunicaciones y mensaje de datos que realice la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, asume como supuestos indispensables la importancia de brindar seguridad a la transmisión de la información, permitiendo a su vez el fácil acceso, verificación de la autenticidad, integridad, y contar con los datos requeridos para la formulación del presupuesto público.

1.2.14 Aspectos complementarios

Atribución de Responsabilidad y Gestión de Identidad.

El régimen de responsabilidad de las entidades de certificación digital es subjetivo y la responsabilidad sobre la información proporcionada para elaborar el presupuesto general de la República también es subjetivo; por tanto es necesario determinar indubitablemente la identidad digital de cada persona interviniente en el proceso de información presupuestal. Respecto a los bienes y servicios cuya calidad e idoneidad esté contenida en la comunicación presupuestal que se comunique por medios electrónicos, la persona junto a su rol, cargo, función debe ser adecuadamente identificado por el sistema informático presupuestal que la CPCGR utilice. Por su lado, las causales de exoneración de responsabilidad están relacionadas con la fuerza mayor, el caso fortuito, las cuales deben ser comunicadas o probadas oportunamente. Como este subproceso debe realizarse electrónicamente

será necesaria que la comunicación garantice la identidad digital del emisor de la comunicación y que las pruebas digitales que se presten sean fehacientes.

Sociedad y Derechos Humanos

Bustamante (2007,b), afirmó que la evolución de los derechos humanos va asumiendo también nuevos niveles con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, incorporando nuevos criterios sobre calidad vida, tales como las facilidades de acceso para el diseño del futuro de cada persona. Es decir más allá de la mera existencia física, la humanidad tiene el derecho de acceder a las tecnologías y a la información, y el uso del mismo, que es en esencia el ejercicio de un nuevo poder. En esta perspectiva las TIC al alcance de los ciudadanos adquiere un valor liberador. (p. 78). De ello se tiene que la ciudadanía global es el nuevo paradigma que tiene a Internet como el factótum por sus aportes de participación y democracia en el uso de las TIC, por lo que es lógico y necesario establecer el nuevo derecho de acceso a la red y sus servicios.

Beneficios de la gestión de identidad digital para los usuarios

La gestión de identidad digital es esencial en la seguridad de las organizaciones para garantizar el acceso de los recursos de los sistemas de información y la seguridad individual en el acceso de recursos, particularmente cuando ellos solicitan acceso sobre información privada de una persona determinada (dinero en el banco, datos personales de su historia clínica). Para asegurar la seguridad de la privacidad, la gestión de identidad digital establece reglas para la relación entre partes remotas.

La gestión de identidad digital no ofrece una única opción para asegurar a las partes en una interacción. Lo que ofrece son rangos de niveles para asegurar la información en forma apropiada. Esta selección racional asegura primariamente los riesgos en la interacción de las partes remotas. Si el nivel de seguridad es alto el riesgo es más controlado, así sucesivamente en los niveles medio altos y medio. A semejanza del mundo físico, nosotros cuando usamos un proveedor de gestión de identidad

exhibimos los atributos que justifiquen asegurar los niveles de riesgo que asume la organización.

Adicionalmente, en algunos casos, el desarrollo de los servicios en línea establece grados en la protección de la privacidad tanto como es posible fuera de línea. Por ejemplo, en la dificultad en el mundo físico de validar los atributos de identidad en el estado matrimonial sin identificar al individuo o establecer legalmente la unión confiando en interacciones físicas o “fuera de línea” basada en el uso de pseudónimos. La protección de la privacidad es necesario que use mecanismos que son posibles en línea.

Mientras que la identidad digital puede proveer accesos sobre la migración en línea, los servicios convencionales requieren la creación de nuevos servicios digitales que le permitan continuar en el progreso. La gestión de identidad digital debe superar en la práctica limitaciones, de tal forma que se acreciente el impacto positivo sobre el desarrollo de la economía en Internet.

1.2.15 Interoperabilidad

La interoperabilidad posibilita que la información sea intercambiada electrónicamente en vez de hacerlo en su forma impresa e implica la posibilidad de que dispositivos y sistemas tecnológicos hablen el mismo idioma. Por ello, en el contexto digital surge la necesidad de una forma adecuada de identificación que procesada electrónicamente permita a las personas acreditar de modo fehaciente su identidad en medios digitales. Nace así de manera natural la necesidad de crear una identidad digital nacional constituida a través del DNle. Desde la perspectiva de la administración pública la interoperabilidad debe ser vista como la aplicación de la capacidad de cada institución para trabajar integradamente con las demás, debiendo precisarse que no existe gobierno electrónico sin interoperabilidad y que no existe interoperabilidad sin voluntad política.

1.2.16 Gobierno Digital

La revolución tecnológica en el sector público apunta a un estado más eficiente, que le haga la vida más sencilla a los ciudadanos y a las

empresas, y agilice las inversiones. En el Perú los avances se concentran en áreas puntuales, como el desarrollo de la identidad digital – sostenida en la biometría-, y la creación de aplicaciones que facilitan los servicios estatales y los trámites que limitan la formalización del país

1.2.17 Firma Digital

La firma digital es un mecanismo que proporciona seguridad tecnológica y jurídica a las transacciones electrónicas y en el Perú la Ley N° 27269 (Ley de firmas y certificados digitales publicada el 28 de mayo del 2000) y su Reglamento (DS 052-2008-PCM) regulan sus formas de uso tanto en el ámbito estatal como privado, otorgando no solo validez legal al acto administrativo y con ello para efectos jurídicos. En este sentido tiene los mismos componentes ciudadanos que una firma manuscrita, de modo que una firma digital es un tipo de firma electrónica generada por un procedimiento criptográfico que establece una relación única y exclusiva entre el dato firmado y el firmante.

1.2.18 Ciudadanía Digital

Bustamante (2007), afirmó que “estamos asistiendo a la apertura de un nuevo espacio de articulación social en el que se hace necesario una nueva concepción de la ciudadanía, con enormes consecuencias en los planos económicos, políticos, ético y epistemológico. Es el tránsito de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Será en este nuevo espacio donde se verifiquen muchas de las relaciones constituyentes de la vida actual. La pertenencia a la misma tierra no se constituye en el factor principal que define la ciudadanía. Ni tampoco la pertenencia al grupo, la naturaleza de las actividades o las formas culturales a las que obedecerán nuestras relaciones”. (p. 54)

La tecnología salta las barreras del plano infraestructural para constituirse en una nueva visión del mundo, una auténtica cibercultura que requiere un nuevo espacio en el que se haga de la ciudadanía una experiencia de vida en común utilizando los medios electrónicos en el ciberespacio.

1.3 Marco Espacial

El presupuesto del sector público es aprobado anualmente por el Congreso de la República y conduce la administración del estado tanto desde el punto de vista económico como financiero, de acuerdo al artículo 77° de la Constitución Política de 1993. Es programado y ejecutado aplicando principios de efectividad para los requerimientos sociales además de descentralizar su ejecución.

La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República (2016), en su Plan de trabajo para el período 2016-2017, señaló que “tiene como rol fundamental formular y aprobar los dictámenes de las leyes anuales relacionadas al presupuesto y financiación del mismo. Así, la Comisión desarrollará sus actividades con transparencia, eficiencia, eficacia y control de la Administración Financiera del Sector Público, sistema constituido por el conjunto de instituciones públicas, normas, subsistemas y procedimientos que interactúan con el proceso presupuestario”. (p. 2)

En este contexto, el presente trabajo de investigación se desarrolló en la ciudad de Lima en las instalaciones del Congreso de la República, CPCGR.

1.4 Marco temporal

El tiempo mínimo necesario para la investigación fue de cuatro meses desde agosto que se instaló la Comisión hasta noviembre que es cuando se aprobó el presupuesto en el pleno.

1.5 Contextualización

1.5.1 Histórica

Las tecnologías de información y comunicación se constituyen en una ciencia moderna de la mano de las sucesivas revoluciones industriales y de la industria de la guerra del siglo XX. De hecho es en la década de 1960 donde aparecen las primeras minicomputadoras ya como una segunda evolución tecnológica, y es en dicha década cuando se establecen los estudios de computación e ingeniería de telecomunicaciones.

Internet tiene sus primeras manifestaciones en los entornos militares desde los años de 1980; desarrollándose en pocos años los servicios de mensajería, correos electrónicos y las páginas web. Este avance se convierte en fenómeno mundial en los años de la década de 1990, expandiéndose a los negocios y la administración pública.

En la actualidad, los acelerados avances tecnológicos y científicos en la rama de las TIC, definen las características de la sociedad, la dinámica de los negocios, las formas de organización social y productiva, la gestión del estado, los medios de comunicación, etc.

Atendiendo a este nivel de desarrollo, y en la prospectiva del futuro de los estados y las sociedades, la producción de leyes y normas ha tenido un crecimiento sustantivo en los últimos tiempos. Es decir que los distintos poderes del estado se rigen ya por normas y leyes relacionadas a las tecnologías de información y comunicación, por cuanto es un asunto del presente social, y sobre todo del futuro de los estados y los ciudadanos.

1.5.2 Social

Las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación tienen en la actualidad un sostenido crecimiento, extendiéndose a todos los campos de la actividad humana; y forma parte de las estrategias de desarrollo de las sociedades. Por ello, en la mayoría de países se tienen políticas públicas para cerrar o disminuir la brecha digital entre los distintos sectores poblacionales, ya sea por corte generacional, geográfico, socioeconómico, etc.

En este sentido, internet, las páginas web, las redes sociales, los blogs, la comunicación digital para audio y video, la tecnología de la telefonía celular móvil, adquieren una neta dimensión social, y no puede escapar a la atención del estado, de los negocios, y de la propia vida en comunidad de las personas.

Se advierte también la presencia de temores por las limitaciones que pueden significar para la libertad individual y la vida privada. Sea cual fuere las tribulaciones del desarrollo y la evolución tecnológica, estamos claramente ante un nuevo grado civilizatorio.

1.5.3 Política

El contexto político del presente estudio está dado por la institucionalidad del estado, especialmente por la interacción entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. En primer lugar el Congreso de la República en su función de fiscalización, tiene la obligación y la prerrogativa de solicitar información sobre asuntos de interés público a toda entidad del estado; en segundo lugar la Comisión de Presupuesto está obligada a recibir, almacenar, procesar y distribuir los informes trimestrales y anuales de la ejecución presupuestal de cada uno de los pliegos presupuestarios; en tercer lugar está el despacho congresal que es una unidad autónoma para efectos del tratamiento de la información y que es el destinatario final de los mencionados informes.

El Ministerio de Economía y Finanzas (2015), en la correspondiente Ley de Presupuesto, definió al pliego presupuestario o presupuestal como toda entidad pública que recibe un crédito presupuestario en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público, y su número ascendió, en el año indicado, a un total de 178 pliegos distribuidos en los 25 gobiernos regionales del Perú.

El contexto político se complementa con la evolución y saltos cualitativos que han experimentado las tecnologías de información y comunicación. Este proceso, por largo tiempo ha sido especialmente intensivo en los ámbitos privados y sólo determinados sectores oficiales. Es decir que los estados soberanos no asumieron en los tiempos iniciales una política clara de desarrollo de estas tecnologías.

En los tiempos actuales, de cara al futuro inmediato y a las proyecciones de mayor horizonte temporal, las entidades gubernamentales han incorporado en su quehacer cotidiano, no solo el uso, sino también la implementación de las TIC a todo nivel de gobierno, y de hecho existen serios esfuerzos para conseguir la interoperabilidad entre los sectores del estado e incluso entre varios estados. El escenario internacional brinda las condiciones positivas para este desarrollo.

1.5.4 Económica

Las posibilidades económicas para la implementación del documento nacional de identidad electrónico en la Comisión de Presupuesto de la República se manifiestan ampliamente positivas, por cuanto es un proyecto compatible con las políticas de modernización del estado, de mejoramiento del servicio al ciudadano y de simplificación administrativa, políticas que son de prioridad tanto para el poder ejecutivo como del poder legislativo.

A ello debe añadirse los aportes en ahorro que significará su implementación, sobre todo si se considera que a partir de una mínima inversión en adaptación del software, e incluso con el equipamiento existente en hardware, se obtendrán beneficios en el ahorro del papel, espacios, mobiliario; sin contar con la posibilidad de manejo automatizado de la información presupuestal de todos los pliegos establecidos. De esta manera es un aporte de valor añadido a la información enriqueciéndola como un bien a disposición de la opinión pública, mas allá de que también es un bien transable entre clientes y proveedores, es decir una nueva mercancía.

1.5.5 Legal

El Marco Legal de la Interoperabilidad en el Perú, está conformado principalmente, por las siguientes normas: (a) Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. Art. 76, numeral 76.2.2 que promueve la interconexión de las plataformas informáticas, (b) Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de Gestión del Estado, que orienta la incorporación de tecnologías debiendo éstas contribuir a la participación ciudadana, la democracia y la descentralización con eficiencia en las atenciones a la población, (c) Resolución Ministerial N° 381-2008-PCM sobre lineamientos, mecanismos y estándares para la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información entre las entidades del Estado, (d) Decreto Supremo N° 066-2011-PCM (26JUL2011) de la Agenda Digital Peruana 2.0 conteniendo estrategias de la interoperabilidad entre las entidades públicas con fines de cooperación, desarrollo, integración y prestación de más y mejores servicios, (e) Decreto Supremo N° 083-2011-PCM (21OCT2011) que crea la Plataforma de Interoperabilidad del Estado-

PIDE como la infraestructura tecnológica que brinda servicios públicos por medios electrónicos, facilitando el intercambio electrónico y de información entre entidades del Estado a través las TIC, (f) Ley N° 29904, Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica estableciendo que corresponde a ONGEI-PCM emitir la Política Nacional de Gobierno Electrónico y el Plan Nacional de Gobierno Electrónico liderando, por ende, la emisión de normas y lineamientos vinculados a el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento y al quehacer del Gobierno Electrónico en el Perú, (g) Resolución Ministerial N° 048-2013-PCM (21FEB2013) del Plan Nacional de Simplificación Administrativa cuyo objetivo estratégico 2° ha establecido criterios de priorización para la incorporación de los procesos a la interoperabilidad: iniciar por los de mayor demanda, tener continuidad en una dinámica de despliegue permanente, (h) Decreto Legislativo N° 1246 (10NOV2016) que establece en su Art.2° la interoperabilidad entre entidades de la Administración Pública y dispone que las entidades de la Administración Pública de manera gratuita, a través de la interoperabilidad, interconecten, pongan a disposición, permitan el acceso o suministren la información o base de datos actualizadas que administren, recaben sistematicen, creen o posean respecto de los usuarios o administrados, que las demás entidades requieran necesariamente y de acuerdo a ley, para la tramitación de sus procedimientos administrativos y para sus actos de administración interna.

1.6 Supuestos teóricos

1.6.1 Procedimiento de seguridad de la información

En la línea de análisis de Veliz (2015), existe el marco legal que fomenta la implementación gradual del gobierno electrónico y desde un enfoque de integralidad aborda en primer lugar la interoperabilidad facilitando la simplificación de los procedimientos, y en segundo lugar desde la identidad digital habilita la inclusión digital y la interrelación de las entidades públicas de manera confiable, mejorando la eficiencia y la eficacia y promoviendo la competitividad del estado. A partir de esta categoría se desarrollaron subcategorías de seguridad de la información en la transmisión, precisión e integridad en el manejo y archivamiento y respaldo legal de los informes.

Seguridad de la información en la transmisión

Esta subcategoría se relaciona con la autenticidad de los emisores y los receptores, entendiendo la autenticidad como una propiedad que permite que el origen de un dato pueda ser identificado, Cuno (2015). En este sentido la firma digital es un dato en formato electrónico generado criptográficamente, estableciéndose una relación única y exclusiva entre el dato firmado y el firmante.

Precisión e integridad en el manejo y archivamiento

La información digitalizada adquiere características y propiedades de mayor valor que los medios impresos en distintos aspectos, empezando por que prácticamente no existen limitaciones de espacio, lo que abona en favor de la integridad y hasta abundancia de la información. Estos valores se potencian con la posibilidad y facilidad de compartir la información con el simple vínculo de una red de computadores, acceso rápido y seguro a la información, disminución de los costos de almacenamiento físico de la documentación, preservación de los documentos a largo plazo mediante copias de seguridad, normalización y ordenamiento racionalizado de la documentación, Integridad de los documentos, frente a catástrofes naturales y modificación del contenido.

Respaldo legal de los informes

La utilización de la firma y el certificado digital cuenta con una normatividad, institucionalidad y procedimientos seguros, que le brindan igual validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, tal que es un empleo concreto del principio de equivalencia funcional por cuanto la instrumentación electrónica cumple la función jurídica en igualdad de valor que la instrumentación escrita o autógrafa, Veliz (2015,b).

1.6.2 Protocolo de procesos de gestión interna

Se relaciona con la identificación y el reconocimiento de los estándares como mecanismos para la interconexión de equipos de procesamiento electrónico de información, esto es, en el logro de la

interoperabilidad definido en sus tres niveles: entre sistemas que soportan y/o consumen servicios, entre las aplicaciones que se ejecutan en las computadoras y entre los dominios establecidos para cada institución o usuario. Estos lineamientos, mecanismos y estándares de interconexión dan el marco a la plataforma de interoperabilidad del estado que permite establecer subcategorías: (a) archivo, (b) ahorro, (c) innovación y (d) transparencia.

Para obtener un esquema de conectividad e interoperabilidad viable se tienen políticas de enfoque de sistemas. estándares abiertos, estándares internacionales, software libre, independencia tecnológica, seguridad y privacidad de la información, RM 381-2008/PCM (2008).

II. Problema de investigación

2.1. Aproximación temática

La Organización de los Estados Americanos (2006a) define al gobierno electrónico como “el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación por parte de las instituciones de gobierno para: mejorar cualitativamente los servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana” . Esta definición tiene sus orígenes en la concurrencia de una serie de eventos y procesos de la tecnología, la política, las sociedades y la economía, que empiezan a tomar forma en la década de 1980 y siguientes.

Uno de los hitos a no dudar son las políticas de modernización de los estados, que como una onda expansiva se difundió en todos los continentes, cuando empieza el uso de las TIC para dinamizar los procesos de la administración pública, instaurando el término “electronic government” o “e-government” que comúnmente se traduce al español como “gobierno electrónico”.

En el año 1993, el entonces vicepresidente estadounidense Al Gore, dio inicio a la implementación del gobierno electrónico con el nombre de “National Performance Review” (NPR). Tenía como objetivo el uso de las TIC para el rediseño de los procesos en la gestión de los distintos niveles de gobierno (NPR, 1997). Del mismo modo, Japón en 1993 y la Comunidad Europea en 1995 implementan políticas de modernización relacionadas con las gestiones de gobierno mediante los denominados “Plan de Promoción en Administración e Informatización” y el “Programa de Intercambio de Datos entre Administraciones”, respectivamente.

En nuestro sub continente, en el contexto de las políticas del “Consenso de Washington” en las que se inscribieron las reformas de los estados latinoamericanos, adoptan los lineamientos del gobierno electrónico de los demás continentes, siempre en la búsqueda de optimizar la ejecución de los presupuestos públicos, ordenar las finanzas estatales, así como los procedimientos de las aduanas y la tributación.

Estas reformas de la administración incorporaron las aplicaciones de las tecnologías de información y comunicación, con la finalidad de articular los sistemas de presupuesto, de contabilidad, y de tesorería. De estos esfuerzos se cuentan el SIAF en el Perú, el SIDIF en Argentina, el SIIF en Uruguay, el SIGFE en Chile, etc. (Red GEALC, SEDI-OEA, ICA/IDRC, 2008.a).

El Congreso de la República representa a la Nación y está encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución Política del Perú. El desarrollo de la función legislativa comprende el debate de la Ley de Presupuesto del Sector Público para cada año, lo que le otorga la facultad y exclusividad para aprobar anualmente el presupuesto del sector público que rige la administración económica y financiera del Estado; asimismo tiene la facultad de fiscalizar su ejecución y aprobar también su rendición de cuentas. En este proceso que comprende diferentes fases como de elaborar, aprobar, ejecutar, y evaluar el presupuesto del Estado.

Las diferentes etapas del proceso presupuestario están descritas en la Ley 28411, que regula globalmente el presupuesto nacional desde el punto de vista sistémico. Establece que los fondos públicos deben asignarse y ejecutarse, sujetándose a los principios de transparencia. Ello implica que la información está a disposición de la ciudadanía, tal como lo establecen las normas del estado. En este contexto la CPCGR, durante el año correspondiente recibe una gran cantidad de información en materia presupuestaria de los pliegos del sector público tanto de ámbito nacional como del ámbito regional y local.

En lo que corresponde al uso de recursos públicos, el Congreso de la República tiene la exclusividad para aprobar anualmente el presupuesto público que rige la administración económica y financiera del Estado; asimismo, tiene la facultad de fiscalizar su ejecución y aprobar también su rendición de cuentas. En este proceso que comprende diferentes fases como elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar el presupuesto del Estado, el Congreso de la República tiene un rol de importancia en las diferentes

etapas del proceso. Así los procesos de asignación y ejecución presupuestal, obedecen a criterios de accesibilidad de información, para lo cual se han establecido medidas de difusión, entrega de información, y controles por los organismos pertinentes.

En este contexto, la CPCGR, de conformidad con la normatividad vigente, durante el año correspondiente recibe una gran cantidad de información en materia presupuestaria de los pliegos del sector público tanto del ámbito nacional, como del regional y local. Esta información es referida a las resoluciones de aprobación del presupuesto por cada entidad pública, resoluciones que modifican el presupuesto institucional de apertura, las evaluaciones financieras trimestrales, semestrales y anuales.

Por Ley N° 28411 se aprueba la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto, la cual, entre otros puntos, establece principios regulatorios tales como la especialización cuantitativa, equilibrios de cuentas, coherencia global de planificación, integridad, eficiencia, unidad en lo normativo, operatividad descentralizada, presunción de veracidad. (Normas legales. 2004)

Cabe indicar que toda entidad del sector público, distribuidas en “Pliegos Presupuestarios, es autorizado por medio del Presupuesto de la República, para ejecutar gastos tendientes al logro de sus objetivos y metas, siempre y cuando éstas se encuentren contempladas en el denominado Plan Operativo Institucional, POI. En tal sentido el presupuesto fiscal es instrumento para la administración estatal, que cuantifica, sistematiza y sumariza los gastos de las distintas instancias, actividades y funciones del gobierno.

2.1.1. Alcance

El estudio tiene como alcance a todas las entidades del sector estatal que están involucradas en las metas y objetivos del gobierno electrónico, y en consecuencia los servidores del estado de todo nivel están obligados a participar de su desarrollo.

En este sentido un factor clave para el desarrollo del gobierno electrónico, considerando sobre todo los beneficios presentes y potenciales para el estado, la sociedad, la economía y la política, es la necesaria convicción firme y el compromiso real de todos los niveles de gobierno, por cuanto implica disponer de personal, recursos financieros, tecnología adecuada y tiempo, para el desarrollo y maduración del gobierno electrónico. Dentro de estos aspectos, la implementación de las firmas y certificados digitales, la masificación del DNle, y las plataformas electrónicas, concurren a los propósitos de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

2.1.2. Preguntas orientadoras

¿Cuáles son los procedimientos para que la información que recibe la comisión de presupuesto del Congreso de la República cuenten con el respaldo de validez, seguridad y eficacia jurídica que corresponde a una información oficial del estado?

¿Cuáles son las características generales de los protocolos de procesos de gestión interna de la información que recibe la comisión en relación a los formatos y recursos requeridos?

2.2. Formulación del problema de investigación

Para dar cumplimiento a la normatividad vigente, las entidades públicas tienen que elaborar, imprimir, anillar y enviar la información presupuestaria de manera física a la Comisión. Esta información es información oficial del estado y por tanto debe contar con el respaldo de la acreditación de la identidad de los funcionarios y autoridades firmantes, así como con atributos de autenticidad de ser una información no modificable; lo que con procedimientos de información impresa en formato físico, dado el volumen de información, genera problemas de estandarización, uso de recursos e impacto ambiental. La implementación del documento nacional de identidad electrónico en la Comisión brinda las cualidades para atender ambos requerimientos y facilita la digitalización de la información.

En la práctica, la Comisión para recibir dicha información tiene que contar con ambientes adecuados y enviarlas a los ponentes o despachos congresales para su evaluación y fiscalización correspondiente. La Comisión no cuenta con los ambientes adecuados para recibir la gran cantidad de información durante el año.

2.2.1. Problema general

¿El requerimiento de validez jurídica para la información recibida por la comisión que obliga al uso intensivo de formatos físicos, puede ser atendido con la implementación del documento nacional de identidad electrónico de modo que permita procesos digitalizados en la gestión interna de dicha información?

2.2.2. Problemas específicos

¿Con qué procedimientos se respalda la seguridad y validez jurídica de los informes recibidos por la comisión en su condición de información oficial del estado?

¿Los protocolos de procesos de gestión interna incorporan procesos digitalizados de modo que se estandaricen los archivos, se ahorre recursos y se disminuya el impacto ambiental?

2.3. Justificación

El presente estudio se justifica por los beneficios teóricos, prácticos y legales que le caracterizan, según el siguiente detalle:

Teórico

El estudio presenta un conjunto de teorías actualizadas y sistematizadas que van a servir a los lectores e investigadores futuros sobre el tratamiento de la información presupuestal y la interoperabilidad entre entidades del estado.

Práctico

La tesis sirve como herramienta de información para la toma de decisiones a nivel de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, a nivel de los despachos congresales, y a nivel de la administración pública en general, por cuanto evidencia la viabilidad y la conveniencia de un manejo digital de la información.

Legal

Se justifica desde el punto de vista legal por cuanto da a conocer todo un conjunto de normas que sustentan la implementación del documento nacional de identidad electrónico en los ámbitos de la gestión congresal en particular y gestión pública en general.

2.4. Relevancia

Nuestra investigación es relevante porque está vinculada con la política de modernización del estado, cuya legislación propone un Estado moderno, eficiente, descentralizado, unitario, inclusivo y dentro del cual se requiere articular el uso intensivo de las TIC. Asimismo se contextualiza en los compromisos asumidos en el Acuerdo Nacional.

2.5. Contribución

La implementación del DNle en la CPCGR aporta para la Comisión:

1. Mejora los procesos de gestión internos.
2. Mejora la comunicación y coordinación intrainstitucional e interinstitucional.
3. Fortalece la innovación y modernización de la Comisión.

Para los ciudadanos:

1. Posibilita la obtención de mejores servicios de la Comisión, con la reducción de tiempo y costos.
2. Fortalece la transparencia de la Comisión.
3. Contribuye a la gobernabilidad.

2.6. Objetivos

2.6.1. Objetivo General

Implementación del documento nacional de identidad electrónico en la comisión de presupuesto. Ello atiende el requerimiento de validez jurídica de la información recibida y permite procesos digitalizados en la gestión interna de dicha información.

2.6.2. Objetivos Específicos

Objetivo Especifico 1

Analizar los procedimientos que respaldan la seguridad y validez jurídica de los informes recibidos por la comisión en su condición de información oficial del estado.

Objetivo Especifico 2

Analizar el protocolo de procesos de gestión interna en la perspectiva de incorporar procesos digitalizados de modo que se estandaricen los archivos, se ahorre recursos y se disminuya el impacto ambiental.

III. Marco metodológico

El Congreso de la República tiene la facultad y exclusividad para aprobar el presupuesto de cada año fiscal que regula la administración económica y financiera del Estado; asimismo tiene la facultad de fiscalizar su ejecución y aprobar también su rendición de cuentas. En este proceso que comprende diferentes fases como de elaborar, aprobar, ejecutar, y evaluar el presupuesto del Estado.

Las diferentes etapas del proceso presupuestario están descritas en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el mismo que establece que los fondos públicos deben asignarse y ejecutarse, sujetándose a los principios de transparencia. Ello implica que la información está a disposición de la ciudadanía, tal como lo establecen las normas del estado. En este contexto la CPCGR, durante el año correspondiente recibe una gran cantidad de información en materia presupuestaria de los pliegos del sector público tanto de ámbito nacional como del ámbito regional y local.

Con el propósito de modernizar la gestión pública, es necesario impulsar la implementación y el uso de medios electrónicos o aplicativos informáticos, que permitan a las entidades públicas de los pliegos presupuestales agilizar de manera eficaz la remisión de la información mediante medios electrónicos confiables y seguros e implementar el esquema autenticación-autorización con el uso del DNI electrónico.

3.1. Metodología

La metodología ha seguido un enfoque cualitativo para permitir un proceso de indagación flexible en la evaluación de los procedimientos utilizados.

3.1.1. Tipo de Estudio

De acuerdo al fin que se persigue el tipo de estudio es de Investigación aplicada, porque tiene como fin ayudar en una mejor gestión a la Comisión de Presupuesto.

3.1.2. Diseño

El diseño es de estudio de casos, toda vez que aporta información que orienta las acciones decisorias destinadas a mejorar la gestión de la Comisión de Presupuesto.

3.2. Escenario de Estudio

El escenario del estudio para la realización de este proyecto de investigación son las instalaciones de la CPCGR.

3.3. Caracterización de Sujetos

Los participantes para este proyecto de investigación son los congresistas que forman parte de la CPCGR y el personal técnico (asesores, secretarios técnicos y especialistas parlamentarios) que conforman dicha Comisión.

3.4. Trayectoria metodológica

Los procedimientos para desarrollar la investigación han sido a través de (a) la observación, (b) localización de las fuentes de datos, (c) análisis e interpretación de la información obtenida.

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

3.5.1. Técnicas

Observación

Es un procedimiento de recolección de datos e información que utiliza los sentidos para observar hechos y realidades sociales presentes y a la gente donde desarrolla normalmente sus actividades. En este caso la aplicación de los procedimientos y criterios expuestos en las normas relacionadas con las funciones de la Comisión, en lo específico con el control presupuestal.

Entrevistas

Esta técnica específica de interacción social, se ha aplicado en virtud de la naturaleza técnica y práctica del estudio, para recopilar los criterios de los expertos en la gestión interna de los procesos de la Comisión. Han sido entrevistas estructuradas con preguntas abiertas sobre el procedimiento

usual del control presupuestal y la gestión de la información, las soluciones posibles y la aplicabilidad del documento nacional de identidad electrónico.

3.5.2. Instrumentos

Observación de documentos

Se ha recurrido a fuentes secundarias tales como libros impresos, páginas web de validez científica, así como publicaciones temáticas y estudios puntuales para exposición de motivos de proyectos de ley obrantes en el Congreso de la República

Guía de entrevista

Se han aplicado entrevistas estructuradas con preguntas abiertas.

3.6. Mapeamiento

La investigación se desarrolló en el Congreso de la República donde está organizado la Comisión de Presupuesto que se encarga de centralizar la información de avance de ejecución presupuestal de los mas de dos mil pliegos presupuestarios, distribuirlos a los congresistas y analizarlos en ejercicio de la función de fiscalización congresal. Las instalaciones de la Comisión están ubicadas en la Av. Abancay 251, Lima.

3.7. Rigor Científico

El estudio ha hecho uso de un método científico calificado, ha aplicado instrumentos confiables y válidos; y los procesos y resultados estuvieron de acuerdo a los cánones de la metodología de investigación actual. Asimismo se ha hecho uso de las normas de redacción y publicación APA

3.7.1. Validez Interna

En este sentido la validez interna se realizó a través del acervo documentario de la CPCGR.

3.7.2. Validez externa

Este criterio hace alusión a la capacidad de generalización de las conclusiones del estudio de casos. Bajo este contexto debemos citar que producto del trabajo de investigación hubieron hallazgos que pueden ser replicados en las demás comisiones del Congreso y en general en las demás dependencias del estado.

3.7.3. Experiencia comparada del uso del DNle

España

La experiencia española en DNI electrónico tiene un desarrollo desde 2006, encontrándose a la fecha la versión 3.0 en fase de implementación. Ha incorporado en esta versión nuevos mecanismos de seguridad así como el valor legal de la firma digital, equiparándola para efectos jurídicos a la firma manuscrita. La última versión del DNle español puede ser usado con la simple aproximación al terminal óptica, lo que facilita articulación con teléfonos inteligentes y similares mediante aplicativos específicos. Con esta característica se posibilita que terceras personas autorizadas ejecuten encargos de los distintos servicios públicos y privados, sea mensajería, recepción y depósito, articulación con recetas electrónicas y atención de las farmacias. Es lo que se denomina poder virtual que dinamiza las transacciones electrónicas en Internet. Asimismo, hace más práctico y útil el uso del DNI electrónico para el ciudadano común.

Asimismo esta nueva versión del DNle español es un documento de viaje de total validez y se comunica con teléfonos celulares inteligentes. Lo cual dinamiza el traslado de personas en Europa, en concordancia con la Directiva de Identificación Electrónica. Es un primer paso, para en el futuro reemplazar a los pasaportes convencionales de modo que la movilidad de las personas en el espacio europeo es uno de los objetivos de esta nueva versión del DNI electrónico español, versión 3.0.

El circuito electrónico interno es de mayor potencia permitiendo asignar características de seguridad a la firma electrónica y su

homogeneidad con la firma manuscrita. Este chip asimismo, tiene mayor potencialidad para nuevas aplicaciones transaccionales. Asimismo, en comunicaciones con el Congreso de la República y Entidades Públicas da mayor fiabilidad. Además, los nuevos hologramas determinan un documento acreditatorio mas seguro e interconectable, que se puede usar de manera intensiva en el tránsito internacional de los ciudadanos con garantías para las personas y para los estados. Ello implica una mayor utilidad y aplicación práctica en el espacio europeo, la movilización con seguridad es una realidad en Europa. En suma, los mecanismos de autenticación del DNI electrónico son suficientes para la seguridad del documento, permitiéndose que se pueda prescindir del PIN.

Alemania

Desde 2010, Alemania utiliza el DNLe (Elektronischer Personalausweis) cuyos detalles técnicos y de uso fueron presentados en el Seminario Internacional sobre Identidad Digital, organizado por RENIEC en Agosto de 2015. Los expositores alemanes dieron alcances detallados de las ventajas de este documento credencial electrónico. Contiene un circuito electrónico con capacidad de almacenamiento de los datos y huellas del ciudadano, permitiendo la acreditación de la identidad en línea para la firma electrónica. Esta conectividad es respaldada por una amplia gama de aplicaciones gubernamentales. En la parte delantera, muestra a la vista los datos usuales de nombres, apellidos y fechas vitales del ciudadano, foto digitalizada, código de acceso remoto de identificación, información académica del titular; finalmente en el reverso se aprecia datos biométricos, residencia, e información administrativa.

Italia

En el año 2006, Italia establece la Carta d'Identità Elettronica (CIE), como acreditación de la identidad de los italianos, siendo emitido por los gobiernos locales del país. La Legislación italiana que incluye el Código de la Administración Electrónica, las normas sobre el sistema de identidad electrónica, el procedimiento administrativo electrónico, tienen como documento fundamental esta credencial electrónica. Contiene un circuito

electrónico integrado que almacena un certificado digital que permite la identificación inmediata mediante mecanismos de interconexión digital. Su estructura y aplicación tiene como referente el acceso a los servicios gubernamentales electrónicos. Existe una tendencia a automatizar los principales procesos de la administración pública, reconocer el valor probatorio de los documentos electrónicos, informatizar la administración de justicia uniformizando el expediente electrónico judicial. Para todas estas aplicaciones la credencial de carta de identidad italiana es importante y necesaria.

IV. Resultados

4.1. Resultado del objetivo específico 1.

Objetivo específico: Analizar la seguridad y validez jurídica de la información

Documento analizado: Identidad Digital: La Identificación desde los Registros Parroquiales al DNle

Entrevistas: Roberto Hernández, Yuri Zapata.

Tabla 1.

Matriz axial: objetivo específico 1

Categorías	Sub Categorías	Observación	Entrevista	Análisis de documentos
Seguridad y validez jurídica de la información	Acreditación de identidad	Los funcionarios responsables deben firmar y sellar los informes impresos que elevan a la comisión	El sello y firma de los funcionarios de los informes son obligatorios para acreditar su autenticidad y validez jurídica. (R. Hernandez)	La legislación nacional brinda garantías técnicas para la fehaciente identificación a través del DNle otorgándole validez y eficacia jurídica.
	Autenticidad de información		El DNle brinda identidad segura y confiable en internet. (Y. Zapata)	

Interpretación: El documento nacional de identidad electrónico que cuenta con el soporte de la legislación nacional, acredita la identidad segura y confiable en las transacciones electrónicas con la seguridad y validez jurídica equivalente a la firma manuscrita, y por tanto es el instrumento obligatorio para la digitalización de los informes que los funcionarios y autoridades responsables remiten a la Comisión de presupuesto.

Por su parte, los procedimientos actuales dificultan el análisis y no incorporan elementos de seguridad de la información; y en paralelo la implementación del documento nacional de identidad electrónico permitirá eficiencia y seguridad en el control presupuestal con validez legal de los actos administrativos

4.2. Resultado del objetivo específico 2.

Objetivo específico: Analizar el protocolo de procesos de gestión interna

Documentos analizados: Proyecto de Ley 3591/2013-.CR. Sistema de control presupuestal y Ley del procedimiento administrativo general N° 27444

Entrevistas: Roberto Hernández, Yuri Zapata, Luis Vilela

Tabla 2.

Matriz axial: objetivo específico 2

Categorías	Sub Categorías	Observación	Entrevista	Análisis de documentos
Protocolo de procesos de gestión interna	Estandarización de archivos	Ausencia de sistema estandarizado	Información voluminosa y formatos distintos (R. Hernández)	Establece el Sistema de Control Presupuestal.
	Ahorro de recursos	Poco espacio para archivos	Necesidad de aplicación de las TIC (Y. Zapata)	Uso de base de datos para fiscalización
	Impacto medioambiental	Ingentes recursos de impresión.	Procedimiento obsoleto (L. Vilela)	Mayor cobertura y acceso a la información
		Papeles y desorden generan polución.	Ver experiencias exitosas en sector privado (Y. Zapata)	

Interpretación: Las tecnologías de información y comunicación con énfasis en identidad digital y bases de datos como un sistema integrado, es una necesidad para estandarizar los informes, disminuir y potencialmente eliminar el uso de recursos de impresión y archivamiento físico, mejorando la calidad ambiental y otorgando mayor cobertura y facilidades de acceso a la información.

Los actuales protocolos de los procesos de gestión interna no obedecen a estándares y no aprovechan los lineamientos de interconexión de las entidades del estado y la implementación de la plataforma de interoperabilidad los mismos que aportarán eficiencia y eficacia a la gestión de la comisión.

4.3. De los datos obtenidos por la observación

Los pliegos presupuestarios establecidos para el estado peruano por la Ley de Presupuesto de cada año, envían información de avance de ejecución presupuestal al finalizar cada trimestre, siendo el último informe el global anualizado. Esto significa que cada pliego presupuestario envía cuatro informes cada año a la Comisión de Presupuesto.

Los informes de avance presupuestal de cada pliego contienen información detallada de la ejecución periódica, a nivel financiero, según actividades y proyectos, incluyendo la descripción correspondiente. De esta manera, en la práctica cada informe consta de no menos de 50 páginas, llegando algunas a 200 y hasta 250 páginas, dependiendo de la entidad informante.

Los pliegos presupuestarios suman alrededor de 2,060 en todo el país, y corresponden a los ministerios, las entidades autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y las mancomunidades municipales establecidas por ley.

Cada informe reportado a la Comisión de presupuesto debe ser reproducido y distribuido a cada miembro de la Comisión, sea titular o accesitario. En el año 2016 la Comisión estuvo integrada por 22 miembros titulares y 49 miembros accesitarios, haciendo un total de 71 congresistas, a quienes se distribuye el informe de los pliegos presupuestarios. La Comisión históricamente mantiene un número similar de integrantes.

Del mismo modo los funcionarios que elaboran los informes y las autoridades que lo suscriben, asumen responsabilidad jurídica por la información que emiten, la misma que debe guardar veracidad, exactitud y oportunidad. Esta condición asigna a los informes la condición de actos administrativos por cuanto surten efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones y derechos de los administrados dentro de la situación concreta de la ejecución presupuestal. Por tanto deben ser suscritos con la validez jurídica correspondiente y esto, en el ámbito digital, sólo lo puede cumplir el documento nacional de identidad electrónico porque cuenta con el soporte legal pertinente.

En la actualidad, la información del avance presupuestal de cada pliego, para ser procesada en los despachos congresales, requiere ser transcrita manualmente a los medios digitales, con la consecuente inversión de tiempo y recursos, además de incorporar riesgos de errores materiales, lo que retrasa y debilita las acciones de control que por función de fiscalización corresponde al congresista de la República.

4.4. De la entrevista

Las entrevistas están estructuradas de acuerdo a los objetivos de la investigación con preguntas abiertas y aplicadas a los actores directos de la comisión, esto es a los funcionarios que operan directamente con la información remitida por las entidades del estado. En tal sentido abordan los aspectos de seguridad y validez jurídica de la información y de los procesos de gestión interna.

El entrevistado número uno indica que los funcionarios y autoridades que remiten los informes firman, rubrican y sellan con el sello institucional correspondiente cada uno de los informes de modo que la información contenida adquiera la validez y eficacia jurídica de información oficial del estado y a la vez protege su autenticidad a partir de su condición de no modificable. En relación a la gestión interna resalta que la información es voluminosa presentada en formatos distintos debido a un ordenamiento con manipulación física. La implementación del documento nacional de identidad electrónico requiere de presupuesto y decisión correspondiente.

El entrevistado número dos ejerce funciones de asesor de la comisión e indica que los aspectos de validez jurídica obedecen a métodos tradicionales de firma y sello, y no existe un procedimiento especializado para la garantizar la autenticidad. Los procesos de gestión interna son manuales, existiendo la necesidad urgente e impostergable de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para ahorrar recursos y evitar la contaminación ambiental que se genera con la inmensa cantidad y manipulación de papeles y archivos físicos. Asimismo para implementar el documento nacional de identidad electrónico en la Comisión de Presupuesto, se debe ver las experiencias del sector privado que han

logrado digitalizar sus procesos con la garantía y seguridad de la información.

El entrevistado número tres es especialista parlamentario en temas de presupuesto y afirma que para garantizar la identidad de los funcionarios y autoridades que remiten los informes, se tiene la firma manuscrita de los responsables, funcionarios y autoridades, depositándose la confianza en los impresos físicos para efectos de la autenticidad. Indica también que los procesos de la gestión interna siguen un procedimiento obsoleto de manipulación física, que genera un importante gasto de recursos que pueden y deben ahorrarse si es que se pudiera hacer con los esquemas electrónicos. Directivas administrativas son suficientes para la implementación del documento nacional de identidad electrónico.

4.5. Estructuración de los resultados

De los datos obtenidos por observación se tiene la siguiente tabla que evidencia el volumen de material impreso que debe ser procesado por la comisión de presupuesto:

Tabla 3.

Cuantificación de volumen documentario en la CPCGR

Pliegos presupuestarios	Número	Informes/año	Total informes	Mínimo páginas	Total páginas
Gobierno nacional	126	4	504	50	25,200
Congreso de la Republica	1	4	4	50	200
Poder Judicial	2	4	8	50	400
Entidades autónomas	9	4	36	50	1,800
Gobiernos regionales	26	4	104	50	5,200
Gobiernos locales	1,874	4	7,496	50	374,800
Mancomunidades municipales	24	4	96	50	4,800
Total	2,062		8,248		412,400

Por su parte, los criterios expresados en las entrevistas se han ordenado en la siguiente tabla, poniendo en evidencia las dificultades y limitaciones de los procedimientos actuales.

Tabla 4

Resultado de entrevistas por categoría analizada

Categoría	Entrevistado 1	Entrevistado 2	Entrevistado 3
Procedimiento de identidad	Obligatorio sello y firma en los informes identifica y da validez jurídica	Forma tradicional de sello y firma	Firma manuscrita
Procedimiento de autenticidad	Sello y firma acredita autenticidad	No existe. DNle brinda seguridad	Impresos físicos
Características gestión interna	Voluminoso y formatos distintos	Procesos manuales. Urge aplicación TICs	Procedimiento obsoleto de manipulación física
Requisitos para implementar DNle	Presupuesto y decisión	Ver experiencias del sector privado	Directiva administrativas

4.6. Relación de categorías

La seguridad y la validez jurídica de la información que recibe la comisión, tiene como componentes la acreditación de la identidad de los funcionarios y autoridades que remiten y la autenticación de la información en el sentido de conllevar una condición de no modificable. En paralelo, existe en la legislación nacional mecanismos que brindan garantías para la identificación mediante el documento nacional de identificación electrónica.

Asimismo los procesos de gestión interna dan cuenta de una ausencia de sistemas estandarizados para el manejo de los informes, lo que genera uso ingente de recursos en pocos espacios generando polución. Frente a ello la implementación del documento nacional de identidad electrónico resuelve estos problemas y permite el uso de base de datos como un sistema alineado con las tareas de fiscalización del congreso, con mayor cobertura y acceso a la información. .

4.7. Teorización

La comisión de presupuesto debe procesar 8,248 informes anuales de al menos 50 páginas cada uno conteniendo los detalles de la ejecución presupuestal que por su naturaleza son bases de datos relacionadas con informe de actividades y proyectos que se llevan a cabo según lo autorizado previamente en la ley de presupuesto.

Al realizarse con informes presentados en formato de papel, implica labores de transcripción y ordenamiento digital. A ello debe añadirse la necesidad de ordenamiento documentario de los informes en correspondientes archivos, lo que conlleva requerimientos de mobiliario y espacios que precisamente son escasos en las instalaciones de la comisión. Una situación similar se replica en los despachos congresales de cada uno de los integrantes de la comisión. Ello determina que el control se realice con restricciones de tiempo y escaso manejo de los datos, lo que implica que los resultados de fiscalización no logran los objetivos deseados. Es decir que los procedimientos actuales no son eficaces para un adecuado acompañamiento congresal en la ejecución de las políticas públicas.

Asimismo, los procedimientos actuales obligan a la duplicidad de acciones de transcripción, aumentan los requerimientos de mobiliario y espacio, y a la vez disminuyen la optimidad del control, determinando que sean ostensiblemente ineficientes.

V. Discusión

Utilizar el DNle como credencial de identidad digital en el Sistema Electrónico de Presupuesto y Cuenta General de la República permite autenticar la identidad para que cada persona asuma su responsabilidad. La responsabilidad puede ser civil, penal, administrativa y funcional. El DNI electrónico va a permitir que la autorización o consentimiento utilizando medios electrónicos sea indubitables y que tenga la característica del No Repudio. Del mismo modo brinda seguridad a la identidad de cada persona evitando la suplantación pues los niveles de seguridad de PKI, los dispositivos criptográficos dentro de un entorno de seguridad medio a ser utilizados por la entidad final cuentan con certificación FIPS 140-2. Este nivel de seguridad garantiza que la identidad esté segura y se evite la suplantación.

La seguridad del DNI electrónico además de evitar la suplantación asegura la conectividad entendiéndose ésta por la capacidad de comunicación de una sociedad al interior de sí misma y con su entorno global, usando conjuntamente las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Adicionalmente, la utilización del DNI electrónico permite establecer un sistema confiable y predecible, que garantiza la certeza de la identificación de las personas que envían la información presupuestal.

Otro tema materia de discusión es la afirmación que hacer obligatorio que la información presupuestal del Gobierno Central, Gobiernos Locales y Regionales sea comunicada únicamente por medios electrónicos utilizando firmas y certificados digitales fortalece las estrategias de Gobierno Electrónico, logrando que los funcionarios utilicen certificados digitales. Al respecto, cabe señalar lo siguiente que conforme el Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digital la firma digital generada dentro de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita. En tal sentido, cuando la ley exija la firma de una persona, ese requisito se entenderá cumplido en relación con un documento electrónico si se utiliza una firma digital generada en el marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica. Y conforme el Decreto Legislativo N° 1272: “Los actos administrativos realizados a través del medio electrónico, poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios físicos tradicionales. Las firmas digitales y

documentos generados y procesados a través de tecnología y medios electrónicos, siguiendo los procedimientos definidos por la autoridad administrativa, tendrán la misma validez legal que los documentos manuscritos. De ello se tiene que los documentos firmados digitalmente con los certificados digitales contenidos en el DNI electrónico tienen la misma validez y jurídica que los documentos firmados manuscritamente, por cuanto los certificados digitales contenidos en este documento credencial están dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE). Por tanto, utilizar medios electrónicos seguros fortalece las estrategias de Gobierno Electrónico y promueve que los funcionarios públicos utilicen las firmas y certificados digitales.

Otro tema materia de análisis son los beneficios para la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República de utilizar un sistema electrónico en los términos planteados en esta investigación, que genere ahorros de costos y mayor transparencia en el cumplimiento de la ley de presupuesto. Al respecto, debe tenerse en cuenta que conforme la Ley N° 30518 “Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces sino cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios bajo la exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del Jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan su veces, en el marco de lo establecido en la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto”. Asimismo, conforme a la Ley N° 30518 “Las entidades del Gobierno Nacional que transfieren recursos a los gobiernos regionales o a los gobiernos locales para la ejecución de proyectos de inversión, deben considerar en la programación de sus respectivos presupuestos institucionales, correspondientes a los años fiscales subsiguientes, bajo responsabilidad del titular, los recursos necesarios que garanticen la continuidad de la ejecución de los proyectos de inversión, hasta su culminación”.

La Ley de Presupuesto, establece obligaciones precisas a los titulares y la premisa que para que sus gastos sean eficaces tienen que tener crédito presupuestario en el correspondiente presupuesto; asimismo,

en los proyectos de inversión de gobiernos regionales y locales debe garantizarse su continuidad. Por tanto, remitir la información presupuestaria por medios electrónicos con firmas y certificados digitales permite que la información llegue a la Comisión de Presupuesto en forma oportuna, confiable y segura. Para implementar el sistema electrónico de Presupuesto en los términos planteados en la presente investigación no se requiere necesariamente de una Ley específica dada por el Congreso de la Republica, bastando con una Directiva aprobada por el Congreso.

Con respecto al Gobierno Electrónico implementar el sistema propuesto es coherente con las estrategias y planes del gobierno electrónico. Hay que tener en cuenta que la Política Nacional de Gobierno Electrónico considera el uso eficiente de las TIC y al Gobierno Electrónico como una obligación que tiene el Estado centrado en los ciudadanos y las personas en general, su adecuada identificación electrónica como elemento transversal en la definición de políticas relacionadas con la gobernabilidad democrática, la transparencia, identidad e inclusión digital y el desarrollo equitativo y sostenible.

Finalmente, con respecto al DNI electrónico su uso en el sistema propuesto permite fortalecer su masificación. Al respecto, cabe señalar que en el marco de las buenas prácticas en documentos de identidad electrónicos de otros países (España, Alemania, Estonia, Italia) y los estándares internacionales, se conceptualizó el DNle como documento de identidad de usos múltiples.

VI. Conclusiones

6.1. Objetivo Especifico 1

Analizar los procedimientos que respaldan la seguridad y validez jurídica de los informes recibidos por la comisión en su condición de información oficial del estado.

Conclusión

Se llega a la conclusión de que la Comisión de Presupuesto no cuenta con un procedimiento adecuado para el tratamiento de la información relacionada con los avances de los pliegos presupuestarios que procesa la Comisión de Presupuesto. Como alternativa requiere utilizar el DNle como credencial de identidad digital de los funcionarios, porque permite autenticar en los medios de internet, la identidad para que cada persona asuma la responsabilidad civil, penal, administrativa y funcional que se asocian a los informes mencionados. El DNI electrónico va a permitir que la autorización o consentimiento utilizando medios electrónicos sean indubitables y que los documentos tengan la condición de autenticidad. Es decir el documento nacional de identidad electrónico da seguridad a la identidad de cada persona evitando la suplantación y permite establecer un sistema confiable y predecible, que garantiza la certeza de la identificación de las personas que envían la información presupuestal, con la plena validez y eficacia jurídica correspondiente.

6.2. Objetivo Especifico 2

Analizar el protocolo de procesos de gestión interna en la perspectiva de incorporar procesos digitalizados de modo que se estandaricen los archivos, se ahorre recursos y se disminuya el impacto ambiental

Conclusión

Los procesos de gestión interna actuales se caracterizan por la manejo de información voluminosa en formatos distintas, con procedimientos obsoletos, observándose ausencia de sistemas estandarizados, falta de espacios para los archivamientos, el uso de ingentes recursos de impresión y polución

generadas por los materiales y el desorden consecuente a la manipulación física.

El documento nacional de identidad electrónico por su naturaleza digital, resuelve los problemas de gestión interna con el manejo de bases de datos que operan a partir de la estandarización de los archivos, adicionalmente implica el ahorro de recursos de materiales físicos de impresión y almacenamiento con un positivo impacto medioambiental.

Tener un sistema informático asociado a la certificación de la firma digital permitirá cumplir con el objetivo de la Ley el cual es enviar la información presupuestaria a la comisión para su fiscalización, y en paralelo contar con un archivo permanente y tener un instrumento de fiscalización oportuno y a la vez significaría tener un ahorro al estado en la cantidad de recursos en papel, anillado, etc., que podrían ser reorientados para otros fines.

Por su parte la conservación de los documentos electrónicos generados por las entidades públicas puede hacerse a un menor costo y siguiendo los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Archivos. Permitiendo que la información recibida sirva como testimonio de transparencia al encontrarse disponible para cualquier investigación. En el actual contexto con la dación de los nuevos Decretos Legislativos, en que el Estado ingresa de lleno a la era digital mediante la implementación efectiva de las TIC, mediante la simplificación, optimización, automatización y eliminación de trámites inútiles, la implementación del uso del DNle con sus certificados digitales de autenticación y firma digital en CPCGR, se hace necesario e imprescindible.

VII. Recomendaciones

Primera

Considerando que la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto conllevará la adecuación tecnológica, es recomendable tomar previsiones para desarrollar el software necesario de comunicaciones así como estandarizar los sistemas usados por las distintas dependencias del estado.

Segunda

En recomendable también que el plan de implementación considere los tiempos adecuados al mencionado desarrollo de software, que por lo general implican pruebas piloto, ajustes técnicos, “marcha blanca”, capacitación de los usuarios e instalación gradual.

Tercera

Es recomendable hacer un plan de sensibilización sobre los beneficios del uso del DNle por parte de los funcionarios relacionados con la emisión y recepción de los reportes presupuestales, no solo porque implica un cambio tecnológico sino que también podría implicar costos marginales en el cambio del DNI clásico por el DNle.

Cuarta

Finalmente es recomendable que los funcionarios de los distintos despachos congresales sean debidamente informados sobre estos cambios y el posible aprovechamiento para el análisis tanto de diagnóstico como predictivo que estará al alcance con la digitalización de los reportes de los 2,062 pliegos presupuestales que trimestralmente reciben; lo que además redundará en una mejor labor legislativa.

VIII. Referencias

- Aliaga, E.; y Calderón E. (2015). Interoperabilidad en el Perú. En: Identidad Digital – La identificación desde los registros parroquiales al DNI electrónico. Perú. Reniec. Páginas 169-183.
- Álvarez, J.E. (2012) Gobierno Electrónico en México: ¿Mito o realidad? Descripción, análisis y evaluación del Gobierno digital en México. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Comunicación Política. UNAM. México.
- Aristóteles. (S.IV a.c.). Política. [En línea]. Recuperado el 02 de marzo de 2017, de http://www.edu.mec.gub.uy/biblioteca_digital/libros/a/Aristoteles%20-%20Politica.pdf.
- Banco Mundial (2015). *e-Government*. The World Bank. IBRD – IDA. [En línea]. Recuperado el 20 de setiembre 2016, de: (2016). Traducción Google.
- Bustamante Donas, Javier. (2007). Cooperación en el Ciberespacio: Bases para una Ciudadanía Digital. En Argumentos de Razon Técnica N° 10, 2007. Universidad de Sevilla. Sevilla. España. Páginas 305-328.
- BUSTAMANTE DONAS, Javier. (2007). Los nuevos derechos humanos: gobierno electrónico e informática comunitaria. En Enla@ce: Revista venezolana de información, tecnología y conocimiento. Año 2. N° 2. Mayo-Agosto 2007. Páginas 13 a 27.
- Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (2007). Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. XVII Cumbre Iberoamericana, Chile, noviembre de 2007. CLAD. Recuperada el 30 de marzo de 2017: http://ww.bnp.gob.pe/portalbnp/pdf/transparencia/normaslegales/2010/jun/carta_iberoamericana_de_gobierno_electronico.pdf

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2012). Libro blanco de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y el Caribe. Recuperado el 12 de Diciembre de 2016 de: <http://www.eclac.org/dpe/publicaciones/xml/2/37352/Libroblanco.pdf>

Congreso de la República. (08 de diciembre de 2004). Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. DO: El Peruano. Cuadernillo de Normas Legales. Lima. Página 281887.

Congreso de la República. (2016). Plan de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 2016-2017. [En línea]. Recuperado el 27 de noviembre de 2016 de: http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/Presupuesto/files/plan_trabajo_2016-2017_aprobado_23.08.pdf

Constitución Política del Perú. (1993). Compilación normativa registral y electoral. RENIEC (Comp.) 2013.

CNUDMI. (2017). Cuestiones jurídicas relacionadas con la gestión de identidad y los servicios de confianza. Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ONU. New York. USA. 30 de Enero de 2017. Documento A/CN.9/WG.IV/WP.141 presentado para el 55° período de sesiones. [En línea]. Recuperado el 15 de febrero de 2017, de: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V17/001/23/PDF/V1700123.pdf?OpenElement>

CNUDMI. (2012). Panorama general de la gestión de la identidad digital. Comisión de la Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. ONU. New York. USA. 27 de julio de 2012. Documento A/CN.9/WG.IV/WP.120 presentado para el 46° período de sesiones. [En línea]. Recuperado el 17 de febrero de 2017, de: [https://documents-dds-](https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/001/20/PDF/V1200120.pdf?OpenElement)

ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V12/551/49/PDF/V1255149.pdf?OpenElement

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el RENIEC y la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica.

Cueva, Eddie et al (2015) “El Documento Nacional de Identidad Electrónico”. En “Identidad Digital: La Identificación desde los Registros Parroquiales al Dni electrónico”. Primera Edición . ED. RENIEC. Lima, Perú. Diciembre 2015.

Cueva, E.; Verástegui, E.; Gallo, A. (2015). *El documento nacional de identidad electrónico*. En: Identidad Digital – La identificación desde los registros parroquiales al DNI electrónico. Perú. Reniec. Páginas 196-214.

Decreto Ejecutivo 149. Ecuador. (2013) Implementación del Gobierno Electrónico en la Administración Publica.

Ferreyros, C. (2016) “Derecho de las Personas e Informática: Identidad Digital. Ed. Grijley. Lima, Perú.

Gastón, A. (2011). El Gobierno Electrónico en la Gestión Pública. ONU CEPAL ILPES. Santiago de Chile. Chile.

Guerra, J.; Pérez, J.; Cano, J. (2011). El documento electrónico como medio de prueba. Colombia. Facultad de Derecho de Universidad Libre.

Gutierrez, C. et al (2006). *Gobierno Electrónico en Chile, Desafíos, Perspectivas y Oportunidades*. Recuperado de: <https://users.dcc.uchile.cl/~prossel/descarga/articulos/PaperIN3Final.pdf>

Giones Vals, Aina et Al (2010) *“La Gestión de Identidad Digital: Una nueva habilidad informacional y Digital”*. Ed. Universidad de Barcelona, España. Facultad de Biblioteconomía.

Iteanu, Oliver (2008) *“L’identite numerique en question”*. Ed. Eyrolles. Paris. Francia.

NPR, (1997). Una breve historia de la Revisión del desempeño nacional. National Performance Review. [En línea]. Recuperado el 20 de agosto de 2016, de <https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/papers/bkgrd/brief.html>. Traducción Google.

OEA - Organización de Estados Americanos (2006). Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la Integridad en las Américas. Secretaría de Asuntos Políticos: Autor. [En línea]. Recuperado el 17 de agosto de 2016, de http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp

OEA - Organización de Estados Americanos (2010). Materiales del curso Introducción a la Formulación de Estrategias de Gobierno Electrónico, edición N° 53.

PCM. (10 de julio de 2013). Decreto Supremo mediante el cual se aprueba la Política Nacional de Gobierno Electrónico 2013-2017. [D.S. 081-2013-PCM]. DO: El Peruano. Cuadernillo de Normas Legales. Lima. Página 498993.

PCM. (18 de julio de 2008). Reglamento de la Ley de Firmas y Certificados Digitales. [Decreto Supremo N° 052-2008-PCM]. Recuperado de [http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5BBE3A1F362D83D105257D1C0050A3C5/\\$FILE/DS-052-2008-pcm.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/5BBE3A1F362D83D105257D1C0050A3C5/$FILE/DS-052-2008-pcm.pdf)

Proyecto de Ley N° 3591/2013-CR, Ley que dispone que las entidades públicas envíen a través de medios electrónicos o aplicativos informáticos la documentación que por mandato legal presentan a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la Republica.

Red GEALC, SEDI-OEA, ICA/IDRC. (2008). De lo teoría a la práctica: Cómo implementar con éxito el gobierno electrónico. La experiencia regional y las barreras de la e-innovación. Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno: Autor. [En línea]. Recuperado el 12 de setiembre 2016, de <http://www.redgealc.org/>. 2014.

Rivera, D. (2004). *El documento electrónico como medio probatorio en un proceso judicial*. Tesis (Memoria de Pregrado). Chile. Universidad de Talca. Escuela de Derecho.

Secretaria Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI-OEA, 2008) Como Implementar con éxito el gobierno electrónico, de la teoría a la práctica.

Umaña Chaux, Andrés Felipe (2003) “Entidades de Certificación: aproximación a su régimen de responsabilidad”. En Derecho de Internet & Telecomunicaciones. Ed. LEGIS y Universidad de los Andes. Bogot

UNESCO. (2002). El gobierno electrónico: perfiles de países. París. [En línea]. Documento en formato .pdf. Recuperado el 20 de setiembre 2016,de:<http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001276/127601s.pdf>

Windley, Philip J. (2005) “Digital Identity: Unmasking Identity Management Architecture (IMA) E. Orielly Media. USA.

IX. Anexos

Anexo 1

Entrevistas

Entrevista i.

Entrevistado: Economista Roberto Hernández Palacios
Cargo: Secretario Técnico de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica.
Lugar: Congreso de la Republica
Tema: Seguridad y validez jurídica de la información y procesos de gestión interna

Pregunta 1. ¿En relación a los informes que remiten los pliegos presupuestales, cuál es el procedimiento para garantizar la identidad de los funcionarios y autoridades que remiten dichos informes?

Respuesta. Los funcionarios y autoridades que remiten los informes firman, rubrican y sellan con el sello institucional correspondiente cada uno de los informes de modo que la información contenida adquiera la validez y eficacia jurídica de información oficial del estado.

Pregunta 2. ¿Cuál es el procedimiento para asegurar la autenticidad de la información contenida en los informes remitidas a la Comisión?

Respuesta. Mediante la firma y el sello en los informes se busca que la información sea no modificable y se garantice la autenticidad de los mismos.

Pregunta 3. ¿Cuáles son las características de la gestión interna en la Comisión para el procesamiento de la información recibida?

Respuesta. En primer lugar significa una información voluminosa por cuanto son mas de dos mil pliegos que envían sus informes en anillados de al menos 50 páginas. Y en segundo lugar son presentados en distintos formatos de ordenamiento con manipulación física.

Pregunta 4. ¿Qué se necesita para implementar el DNle en la Comisión de Presupuesto?

Respuesta. Presupuesto y decisión para su implementación.

Entrevista ii.

Entrevistado: Contador Yuri Zapata Ramirez

Cargo: Asesor de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica.

Lugar: Congreso de la Republica

Tema: Seguridad y validez jurídica de la información y procesos de gestión interna

Pregunta 1. ¿En relación a los informes que remiten los pliegos presupuestales, cuál es el procedimiento para garantizar la identidad de los funcionarios y autoridades que remiten dichos informes?

Respuesta. Los anillados se firman y sellan como es la forma tradicional.

Pregunta 2. ¿Cuál es el procedimiento para asegurar la autenticidad de la información contenida en los informes remitidas a la Comisión?

Respuesta. No existe un procedimiento especializado para el caso. Sin embargo el documento nacional de identidad electrónico es un mecanismo que brinda una identidad segura y confiable en internet, por lo que debe ser implementado en una solución digitalizada.

Pregunta 3. ¿Cuáles son las características de la gestión interna en la Comisión para el procesamiento de la información recibida?

Respuesta. Los procesos de gestión interna son manuales, existiendo la necesidad urgente e impostergable de la aplicación de las tecnologías de información y comunicación (TICs) para ahorrar recursos y evitar la contaminación ambiental que se genera con la inmensa cantidad y manipulación de papeles y archivos físicos.

Pregunta 4. ¿Qué se necesita para implementar el DNle en la Comisión de Presupuesto?

Respuesta. Ver las experiencias del sector privado que han logrado digitalizar sus procesos con la garantía y seguridad de la información.

Entrevista iii.

Entrevistado: Abogado Luis Vilela Dioses

Cargo: Especialista Parlamentario de la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Republica.

Lugar: Congreso de la Republica

Tema: Seguridad y validez jurídica de la información y procesos de gestión interna

Pregunta 1. ¿En relación a los informes que remiten los pliegos presupuestales, cuál es el procedimiento para garantizar la identidad de los funcionarios y autoridades que remiten dichos informes?

Respuesta. Los informes tienen la firma manuscrita de los responsables, funcionarios y autoridades.

Pregunta 2. ¿Cuál es el procedimiento para asegurar la autenticidad de la información contenida en los informes remitidas a la Comisión?

Respuesta. Se deposita la confianza en los impresos físicos.

Pregunta 3. ¿Cuáles son las características de la gestión interna en la Comisión para el procesamiento de la información recibida?

Respuesta. Los procesos de la gestión interna siguen un procedimiento obsoleto de manipulación física, que genera un importante gasto de recursos que pueden y deben ahorrarse si es que se pudiera hacer con los esquemas electrónicos

Pregunta 4. ¿Qué se necesita para implementar el DNle en la Comisión de Presupuesto?

Respuesta. Directivas administrativas.

Anexo 2

Tabla de categorías

Unidad temática	Categorías	Sub Categorías	Objetivos	Observación	Entrevista	Análisis de documentos	Documentos	Marco teórico
Implementación del DNle en la Comisión de presupuesto y Cuenta general de la República (CPCGR)	Seguridad y validez jurídica de la información	<p>Acreditación de identidad</p> <p>Autenticidad de información</p>	Analizar la seguridad y validez jurídica de la información	Los funcionarios responsables deben firmar y sellar los informes impresos que elevan a la comisión	<p>El sello y firma de los funcionarios de los informes son obligatorios para acreditar su autenticidad y validez jurídica. (R. Hernandez)</p> <p>El DNle brinda identidad segura y confiable en internet. (Y. Zapata)</p>	La legislación nacional brinda garantías técnicas para la fehaciente identificación a través del DNle otorgándole validez y eficacia jurídica.	Identidad Digital: La Identificación desde los Registros Parroquiales al DNle.	<p>Gestión de la identidad.</p> <p>Gobierno electrónico</p> <p>DNle</p>
	Protocolo de procesos de gestión interna	<p>Estandarización de archivos</p> <p>Ahorro de recursos</p> <p>Impacto medioambiental</p>	Analizar el protocolo de procesos de gestión interna	<p>Ausencia de sistema estandarizado</p> <p>Poco espacio para archivos</p> <p>Ingentes recursos de impresión.</p> <p>Papeles y desorden generan polución.</p>	<p>Información voluminosa y formatos distintos (R. Hernández)</p> <p>Necesidad de aplicación de las TIC (Y. Zapata)</p> <p>Procedimiento obsoleto (L. Vilela)</p> <p>Ver experiencias exitosas en sector privado (Y. Zapata)</p>	<p>Establece el Sistema de Control Presupuestal.</p> <p>Uso de base de datos para fiscalización</p> <p>Mayor cobertura y acceso a la información</p>	<p>Proyecto de Ley 3591/2013-.CR. Sistema de control presupuestal</p> <p>Ley del Procedimiento administrativo general N° 27444</p>	<p>Interoperabilidad</p> <p>Marco económico</p> <p>Beneficios de la tecnología y del gobierno electrónico</p>

“Implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República”

Br. Elías Modesto Martínez Pagán

Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo

Resumen

La presente investigación titulada: “Implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República” tiene como objetivo general analizar la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República”.

El tipo de investigación fue, según su finalidad, investigación básica, el diseño es de estudio de casos, de enfoque cualitativo.

Según los hallazgos realizados a través del análisis de documentos de investigación y de entrevistas al personal que labora en la Comisión, permitió dar respuesta a la pregunta de investigación ¿Cuáles serían las bondades de la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República?.

La encuesta estructurada se aplicó al personal que presta servicios en la Comisión de Presupuesto como son: secretario técnico y asesores de la Comisión.

Palabras claves: DNle, identidad digital.

Abstract

The present research entitled "Implementation of the DNle in the Comisión de Presupuesto del Congreso de la República" has as general objective to analyze the implementation of the DNle in the Comisión de Presupuesto del Congreso de la República".

The type of research was: according to its purpose, basic research, the design is case study, qualitative approach.

According to the findings made through the analysis of research documents and interviews with the staff working in the Commission, it was possible to answer the research question "What would be the benefits of implementing the DNle in the Comisión de Presupuesto del Congreso de la República?.

The population was staffed by the staff of the Comisión de Presupuesto, such as the technical secretary and the Commission's advisors.

Key words: DNle, digital identity.

1. INTRODUCCIÓN

El acelerado desarrollo de las ciencias y la tecnología en el mundo moderno ha facilitado la integración de los pueblos y de los hombres en general, haciendo de los mismos adecuados instrumentos que ahorra costos y optimiza la gestión.

En el contexto del desarrollo de los derechos humanos de cuarta generación el establecimiento del "Gobierno Electrónico" significa la aplicación de las tecnologías de información y comunicación en las entidades del sector público para mejorar la atención a los ciudadanos, hacer mas eficaz y eficientes la gestión e incrementar la transparencia y la participación ciudadana

Las distintas instituciones peruanas vienen implementando políticas para el uso intensivo y cada vez más extenso de la identidad digital, DNle, tanto en los asuntos públicos como privados, para lo cual se le ha ido incorporando características jurídicas y tecnológicas, obteniendo así un documento identitario confiable, seguro, de amplia capacidad de almacenamiento, listo para ser usado en las transacciones con el estado y la sociedad.

Estas condiciones determinan el problema central de la presente investigación: el requerimiento de validez jurídica para la información recibida por la comisión de presupuesto del Congreso de la República que obliga al uso intensivo de formatos físicos, problema que puede ser atendido con la implementación del documento nacional de identidad electrónico de modo que permita procesos digitalizados en la gestión interna de dicha información.

El estudio presenta un conjunto de teorías actualizadas y sistematizadas sobre el tratamiento de la información presupuestal y la interoperabilidad entre entidades del estado, y sirve como herramienta de información para la toma de decisiones a nivel de la Comisión de

Presupuesto, de los despachos congresales y de la administración pública en general, por cuanto evidencia la viabilidad y la conveniencia de un manejo digital de la información

La aplicación de los instrumentos han permitido la observación de los requerimientos de seguridad, confidencialidad y validez jurídica de la información sensible que remiten las autoridades del conjunto del estado; y que obligan a una necesaria optimización de los recursos y de los procesos vía el uso de las tecnologías de información y comunicación, la plataforma de interoperabilidad del estado y sustantivamente al sistema de identificación digital.

La conclusión es que la implementación del documento nacional de identidad en la comisión de presupuesto, resuelve los problemas de gestión interna con el manejo de bases de datos operados a partir de la estandarización de los archivos determinando el ahorro de recursos de materiales físicos y un positivo impacto medioambiental.

2. METODOLOGÍA

La metodología ha seguido un enfoque cualitativo para permitir un proceso de indagación flexible en la evaluación de los procedimientos utilizados en una investigación aplicada orientada a ayudar en una mejor gestión. El diseño es de estudio de casos en el escenario de la Comisión de Presupuesto teniendo como sujetos a los congresistas y personal técnico (asesores, secretarios técnicos y especialistas parlamentarios) de dicha comisión.

Los procedimientos para desarrollar la investigación han sido a través de: (a) la observación, (b) localización de las fuentes de datos, (c) análisis e interpretación de la información obtenida.

3. RESULTADOS

Al realizarse con informes presentados en formato de papel, los informes de los 2062 pliegos presupuestales implica labores de transcripción y ordenamiento digital. A ello debe añadirse la necesidad de ordenamiento documentario de los informes en correspondientes archivos, lo que conlleva requerimientos de mobiliario y espacios que precisamente son escasos en las instalaciones de la comisión. Una situación similar se replica en los despachos congresales de cada uno de los integrantes de la comisión. Ello determina que el control se realice con restricciones de tiempo y escaso manejo de los datos, lo que implica que los resultados de

fiscalización no logran los objetivos deseados. Es decir que los procedimientos actuales no son eficaces para un adecuado acompañamiento congresal en la ejecución de las políticas públicas.

Asimismo, los procedimientos actuales obligan a la duplicidad de acciones de transcripción, aumentan los requerimientos de mobiliario y espacio, y a la vez disminuyen la optimidad del control, determinando que sean ostensiblemente ineficientes.

El documento nacional de identidad electrónico cuenta con el soporte de la legislación nacional y acredita la identidad segura y confiable en las transacciones electrónicas con la seguridad y validez jurídica equivalente a la firma manuscrita. Por tanto es el instrumento obligatorio para la digitalización de los informes que los funcionarios y autoridades responsables remiten información sensible a la Comisión de presupuesto.

Por su parte, los procedimientos actuales dificultan el análisis y no incorporan elementos de seguridad de la información; y en paralelo la implementación del documento nacional de identidad electrónico permitirá eficiencia y seguridad en el control presupuestal con validez legal de los actos administrativos.

Las tecnologías de información y comunicación con énfasis en identidad digital y bases de datos como un sistema integrado, es una necesidad para estandarizar los informes, disminuir y potencialmente eliminar el uso de recursos de impresión y archivamiento físico, mejorando la calidad ambiental y otorgando mayor cobertura y facilidades de acceso a la información.

4. DISCUSIÓN

La seguridad del DNI electrónico además de evitar la suplantación asegura la conectividad entendiéndose ésta por la capacidad de comunicación de una sociedad al interior de sí misma y con su entorno global, usando conjuntamente las telecomunicaciones y las tecnologías de la información. Adicionalmente, la utilización del DNI electrónico permite establecer un sistema confiable y predecible, que garantiza la certeza de la identificación de las personas que envían la información presupuestal.

Su implementación es coherente con respecto al Gobierno Electrónico que como Política Nacional del estado considera el uso eficiente de las TIC y al Gobierno Electrónico como una obligación, donde las dinámicas están enfocadas en el mejor servicio al ciudadano y a las personal en general. Forma parte de una adecuada política de identificación electrónica como elemento transversal en la definición de políticas relacionadas con la gobernabilidad

democrática, la transparencia, identidad e inclusión digital y el desarrollo equitativo y sostenible.

5. CONCLUSIONES

Se llega a la conclusión de que la Comisión de Presupuesto no cuenta con un procedimiento adecuado para el tratamiento de la información relacionada con los avances de los pliegos presupuestarios que procesa la Comisión de Presupuesto. Como alternativa requiere utilizar el DNle como credencial de identidad digital de los funcionarios, porque permite autenticar en los medios de internet, la identidad para que cada persona asuma la responsabilidad civil, penal, administrativa y funcional que se asocian a los informes mencionados.

Asimismo el documento nacional de identidad electrónico por su naturaleza digital, resuelve los problemas de gestión interna con el manejo de bases de datos que operan a partir de la estandarización de los archivos, adicionalmente implica el ahorro de recursos de materiales físicos de impresión y almacenamiento con un positivo impacto medioambiental.

Tener un sistema informático asociado a la certificación de la firma digital permitirá cumplir con el objetivo de la Ley el cual es enviar la información presupuestaria a la comisión para su fiscalización, y en paralelo contar con un archivo permanente y tener un instrumento de fiscalización oportuno y a la vez significaría tener un ahorro al estado en la cantidad de recursos en papel, anillado, etc., que podrían ser reorientados para otros fines.

Es altamente recomendable que para la implementación del DNle en la Comisión de Presupuesto incorpore la adecuación tecnológica con las previsiones para desarrollar el software necesario de comunicaciones así como estandarizar los sistemas usados por las distintas dependencias del estado. Asimismo que el plan de implementación considere los tiempos adecuados al mencionado desarrollo de software, que por lo general implican pruebas piloto, ajustes técnicos, “marcha blanca”, capacitación de los usuarios e instalación gradual.

Finalmente requiere hacer un plan de sensibilización sobre los beneficios del uso del DNle por parte de los funcionarios relacionados con la emisión y recepción de los reportes presupuestales, no solo porque implica un cambio tecnológico sino que también podría implica costos marginales en el cambio del DNI clásico por el DNle.

6. REFERENCIAS

Aliaga, E.; y Calderón E. (2015). Interoperabilidad en el Perú. En: Identidad Digital – La identificación desde los registros parroquiales al DNI electrónico. Perú. Reniec. Páginas 169-183.

Álvarez, J.E. (2012) Gobierno Electrónico en México: ¿Mito o realidad? Descripción, análisis y evaluación del Gobierno digital en México. Tesis para obtener el título de Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Comunicación Política. UNAM. México.

BUSTAMANTE DONAS, Javier. (2007). Cooperación en el Ciberespacio: Bases para una Ciudadanía Digital. En Argumentos de Razon Técnica N° 10, 2007. Universidad de Sevilla. Sevilla. España. Páginas 305-328.

Congreso de la República. (2016). Plan de trabajo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República 2016-2017. [En línea]. Recuperado el 27 de noviembre de 2016 de: http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/Presupuesto/files/plan_trabajo_2016-2017_aprobado_23.08.pdf

Constitución Política del Perú. (1993). Compilación normativa registral y electoral. RENIEC (Comp.) 2013.

NPR, (1997). Una breve historia de la Revisión del desempeño nacional. National Performance Review. [En línea]. Recuperado el 20 de agosto de 2016, de <https://govinfo.library.unt.edu/npr/library/papers/bkgrd/brief.html>. Traducción Google.

OEA - Organización de Estados Americanos (2006). Guía de Mecanismos para la Promoción de la Transparencia y la Integridad en las Américas. Secretaría de Asuntos Políticos: Autor. [En línea]. Recuperado el 17 de agosto de 2016, de http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_egov.asp

Umaña Chaux, Andrés Felipe (2003) “Entidades de Certificación: aproximación a su régimen de responsabilidad”. En Derecho de Internet & Telecomunicaciones. Ed. LEGIS y Universidad de los Andes. Bogotá.

UNESCO. (2002). El gobierno electrónico: perfiles de países. París. [En línea]. Documento en formato .pdf. Recuperado el 20 de setiembre 2016, de: <http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001276/127601s.pdf>

Windley, Philip J. (2005) “Digital Identity: Unmasking Identity Management Architecture (IMA) E. Orielly Media. USA.